

Julio 28 de 1938

26ª REUNION — 17ª SESION ORDINARIA

Presidencia del señor Juan G. Kaiser y del doctor
Juan Vilgré La Madrid

MINISTROS PRESENTES:

del Interior,
Doctor Diógenes Taboada
de Guerra,
General de brigada Carlos D.
Márquez

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguiar, Henoch D.
Aguirre Cámara, José
Agulla, Juan Carlos
Alsina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Allperín, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Arbeletche, Aníbal P.
Astesiano, Carmelo I.
Barceló, Alberto
Barrau, José
Barrionuevo, Gerardo
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Beristain, Francisco
Bertotto, José G.
Boatti, Ernesto C.
Boero, Albino
Busaniche, Julio A.
Busignani, Mario
Cafferata, Juan F.
Cantilo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carreras, Ernesto L. de las
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Courrel, Carlos D.
Critto, Miguel

De Miguel, Benito
Devoto Aosta, Alcibiades
Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Eberlé, Enrique
Espil, Alberto
Eyto, Francisco F.
Fassi, Santiago Carlos
Fazio Rojas, Lorenzo
Ferreira, Antenor R.
Figueroa, Julio A.
Ghioldi, Américo
Godoy, Raúl
Gómez Grandoli, Clemente
González, Benjamín S.
Güerci, José María
Guerrero, José Rafael
Guglielmelli, Aquiles M.
Guillot, Víctor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Horne, Bernardino
Infante, Faustino
Iriondo, Urbano de
Izurieta Pourquet, Agustín
Jaramilla, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Labayen, Juan
Labús, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lezica Alvear, Florencio
Lima, Vicente Solano
López García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, F. Benigno
Martínez, Gregorio N.
Mihura, Enrique F.
Montagna, Carlos P.
Moreno, Ricardo A.
Mugica, Adolfo

Muniagurria, Walter Julio
Noel, Carlos M.
Noel, Martín
Onsari, Fabián
O'Reilly, Guillermo R.
Ortiz de Zárate, Miguel
Osoreo Soler, Manuel E.
Osorio, Miguel
Pagano, David J.
Palacio, Benjamín
Pandolfo, Pío
Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Paz Posse, Ramón D.
Peco, José
Pefía, Ernesto S.
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Pizarro, Néstor A.
Quintana, Fenelón
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Saccone, Romeo D.
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez, Julián
Schoo Lastra, Dionisio
Simón Padrós, J.
Siri, Obdulio F.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquímedes A. E.
Solís, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Tapia, Numa

Teisaire, Eduardo (h.)
Urien, Enrique César
Vásquez, Juan Carlos
Videla Dorna, Daniel
Vilchez, Martín
Vilgré La Madrid, Juan
Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Arias Uriburu, Juan
Biancofiore, Rafael
Duffy, Eduardo N.
Gómez Rincón, Abel
Grisolia, Luis
Illanes, Eloy J.
López, Héctor S.
Martínez, Manuel
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Morrogh Bernard, Juan F.
Ortiz Basualdo, Samuel
Prat Gay, Fernando de
Radio, Pedro
Sáenz, Mario

AUSENTES, CON AVISO:

Damonte Taborda, Raúl
Hernández, Victorio
Martínez, Benito E.
Sánchez, Adolfo B.
Vélez, Francisco M.

AUSENTES, SIN AVISO:

Cabral, Humberto
Carús, Agustín J.
Castex, I. Mario
Castro Frediani, Manuel L.
Garona, Juan A.
Grassi, Alfredo
Irigoyen, Carlos

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría.

2.—Acta.

3.—Aclaración solicitada por el señor diputado Pastor, respecto a la forma de dar cuenta de los asuntos entrados.

4.—Asuntos entrados:

I.—Despachos de comisión.

II.—Peticiónes particulares.

III.—El señor diputado Solari (J. A.) y otros, reproducen con modificaciones un proyecto de ley sobre incompatibilidades de los miembros del Congreso.

IV.—Proyecto de ley del señor diputado **Videla Dorna** y otros, sobre pensión a la señora **Ramona Andrade** viuda de **Cattorini**.

V.—Proyecto de ley del señor diputado **Zavala Ortiz** y otros, sobre subsidio a la **Sociedad de Beneficencia de Vicuña Mackenna**, Río Cuarto (Córdoba).

VI.—Proyecto de ley de los señores diputados **Zara** y **Saá**, sobre instalación de la **Escuela Nacional de Agricultura y Enología** de **Mendoza**, en tierras adquiridas por la **Junta Reguladora de Vinos**.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado **Irigoyen** y otros, sobre construcción de un pabellón y dispensario antivenéreo anexo a la sala de servicios hospitalarios de villa **General Galarza**, en **Guaaleguay** (Entre Ríos).

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado **Montagna**, sobre modificación del cuadro **A** de la ley número 12.349 (Policía de la Capital), incorporada al presupuesto vigente.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado **Iriondo** y otros, acordando a la señorita **Raquel Rodríguez**, hermana del ex diputado **Alfredo Rodríguez**, el importe de dos años de dietas.

X.—Proyecto de ley del señor diputado **Vilchez**, sobre subsidio a la **Comisión Popular de Homenaje a Sarmiento**, de **San Francisco del Monte de Oro** (San Luis).

XI.—El señor diputado **Carriis** y otros, reproducen, con modificaciones, un proyecto de ley sobre carácter rentado de las cátedras actualmente consideradas anexas al cargo de director y vicedirector en las escuelas normales de la Nación.

XII.—El señor diputado **Cafferata** reproduce un proyecto de ley sobre subsidio al **Museo Colonial de Córdoba**, para adquisición de la casa del virrey **Sobremonte**.

5.—Nómina de proyectos de resolución y declaración presentados por los señores diputados.

6.—Indicación del señor diputado **Cafferata**, sobre inserción de una nota en el Diario de Sesiones.

7.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones al señor diputado **Illanes**.

8.—Integración de comisión.

9.—Orden de la labor.

10.—Se rechaza una moción de sobre tablas para tratar el proyecto de resolución del señor diputado **Dickmann**, sobre comisión especial encargada de estudiar la situación de la industria textil.

11.—Termina la consideración del proyecto de reso-

lución del señor diputado **Sancerni Gimenez**, solicitando informes al Poder Ejecutivo sobre la industria textil y cuestiones conexas. Se aprueba con modificaciones.

12.—Termina la consideración del despacho de la **Comisión de Guerra y Marina**, en el proyecto de ley sobre gendarmería nacional.

—En Buenos Aires, a veintiocho días del mes de julio del año 1938, siendo la hora 15 y 58:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Allperín. — ¿Hay número en el recinto, señor presidente?

Sr. Presidente (Kaiser). — En el recinto no, señor diputado; en la casa, sí.

Sr. González. — Formulo indicación de que se continúe llamando unos minutos más.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando.

2

ACTA

—A la hora 16 y 5.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda abierta la sesión con 85 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado **González**, se suprime la lectura, y se da por aprobada el acta.

3

ACLARACION

Sr. Pastor. — Pido la palabra, para una cuestión relativa a los asuntos entrados.

Sr. Presidente (Kaiser). — Previamente se debe dar cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Pastor. — Precisamente de los asuntos entrados quiero hablar.

Pido a la Presidencia que se sirva informar a la Cámara, cuál es su criterio respecto a la forma en que debe darse entrada a los asuntos. Solicito esta aclaración, porque nosotros esta-

Sr. Simón Padrós. — El punto primero, dice: ¿Qué piensa el Poder Ejecutivo sobre la supresión del trabajo nocturno en la industria textil?

No vemos inconveniente en aceptar este punto tal cual está redactado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Simón Padrós. — El segundo punto viene redactado en la siguiente forma: «Por qué no se cumple en la industria textil algodonera la ley de los trabajos insalubres.»

Yo propongo: «Si en la industria textil algodonera se cumple la ley de los trabajos insalubres.»

Sr. Anastasi. — Se debe especificar. Si el señor diputado Dickmann se refiere, por ejemplo, a la ley de limitación de la jornada de trabajo para los trabajos insalubres, bien; pero entiendo que el señor diputado quiere referirse a las diversas prescripciones que están dispersas sobre higiene y salubridad.

Sr. Dickmann. — Podría decirse «las disposiciones vigentes».

Sr. Simón Padrós. — Entonces, diría: «Si en la industria textil algodonera se cumplen las disposiciones legales inherentes a la salubridad del trabajo.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Simón Padrós. — El tercer punto dice: «Qué piensa el Poder Ejecutivo sobre la fijación de un salario mínimo y un escalafón en el trabajo de la industria textil.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Simón Padrós. — Cuarto: «Si ha realizado un estudio de la capacidad normal de trabajo de los obreros de la industria textil, especialmente de las mujeres y menores.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Simón Padrós. — Quinto: «Si conoce el monto de los capitales invertidos y las ganancias obtenidas, especialmente desde la aplicación del adicional del 10 por ciento.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Simón Padrós. — Sexto. El señor diputado Dickmann decía: «Si el Poder Ejecutivo conoce el envío a los fabricantes por la Unión Industrial Argentina de las llamadas listas negras y qué medidas ha tomado para impedir y castigar su circulación.»

Yo propondría: «Si el Poder Ejecutivo averiguó que la Unión Industrial Argentina hubiera enviado a los fabricantes las llamadas listas negras...». Así empecemos por averiguar si ello es exacto.

Sr. Lazo. — Averiguar no; si tiene conocimiento.

Sr. Dickmann. — Acepto.

Sr. Simón Padrós. — «Si el Poder Ejecutivo conoce que...»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en esa forma.

— Resulta afirmativa.

Sr. Simón Padrós. — Séptimo: «Si el Poder Ejecutivo conoce el número de infracciones a las leyes obreras en la industria textil, el monto de las multas aplicadas y ejecutadas por tales infracciones.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Lazo. — Sobre el artículo 1º no ha recaído una votación definitiva de la Cámara. Se votó el artículo 1º y resultó negativa; el señor diputado Anastasi pidió rectificación, y entonces la Cámara votó solamente el pedido de rectificación.

Sr. Dickmann. — La Presidencia puede informar.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia entendía que se había votado. Como hay duda, se votará el artículo 1º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda sancionado y se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a pasar a la orden del día. En discusión el artículo 6º

del despacho sobre creación de la gendarmería nacional.

Tiene la palabra el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, que estaba en uso de ella.

—Ocupan sus asientos los señores ministros del Interior, doctor Diógenes Taboada, y de Guerra, general de brigada don Carlos D. Márquez.

Sr. Cooke. — Señor presidente: no he de faltar a esa sobriedad parlamentaria a que se acaba de referir hace pocos instantes el señor diputado Tamborini, pero el punto de la ley de gendarmería, en discusión, es, a mi juicio, uno de los fundamenta'es, y por fuerza he de tener que ser un poco extenso para abarcar el aspecto que interesa a mi exposición en todas sus fases.

Antes de referirme al artículo 6º en discusión, deseo hacer una manifestación de carácter exclusivamente personal. Voté en general la sanción de esta ley de gendarmería, porque a pesar de mi discrepancia irreducible con dos puntos de la misma, que consideraba esenciales —el que se refiere a los lugares en que la gendarmería ha de ejercer sus funciones y el relativo a la aplicación del Código Militar en cuanto a su disciplina— creía que íbamos a votar una buena ley. La impugnación minuciosa y vehemente del señor diputado Solari, que escuché con atención y leí después con todo detenimiento, no me convenció de que fuera suficiente para modificar mi criterio respecto a la bondad de la ley, contemplada en su aspecto general.

Cuando escuché la palabra del señor diputado Solana, sencilla pero convincente, tuve la sensación de que al referirse a la aplicación del Código Militar, había tocado el aspecto que, a mi juicio, merecía el reparo más fundamental a esta ley; pero tampoco fué óbice para mi voto en favor del proyecto, porque abrigaba la esperanza de que en la discusión en particular sería fácil introducir las mejoras que perfeccionaran su sanción.

Frente a la impermeabilidad de la mayoría de la Cámara, robustecida, indudablemente, por la actitud de los señores ministros del Interior y de Guerra, que no se han allanado a justificar ni a propiciar ninguna modificación, declaro, que de haber conocido el propósito de no admitir enmiendas, hubiera votado en contra. No me hubiera detenido ni siquiera la circunstancia de que este proyecto, como lo anotó el

señor diputado Solana, es un calco del que remitió el presidente doctor Alvear y que refrendó en una oportunidad quien fuera un eminente constitucionalista, el doctor José Nicolás Matienzo, y en otra, el actual presidente de nuestro bloque, doctor Tamborini, quien, a justo título y por muchos conceptos, es acreedor a nuestra más especial consideración, todo lo cual no importaría, a mi juicio, atribuirles una infalibilidad que no es condición de seres humanos.

Intervengo, pues, en la discusión en particular, posiblemente por última vez, y más por la necesidad de salvar una convicción que por la creencia de conseguir modificar la posición de los diputados por la mayoría, aparentemente abrumados por la responsabilidad de que un proyecto de ley que ha demorado 26 años para su sanción pueda ser demorado unos días más por su revisión en el Senado.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, doctor Juan Vilgré La Madrid.

Corresponde, en esta oportunidad, que me ocupe del artículo 6º, pero por su íntima correlación con los artículos 7º y 8º del proyecto, —cuya supresión solicitaré, substituyéndolo por uno nuevo—, voy a hacer un análisis de estas disposiciones, que hará innecesaria mi intervención posterior en este debate si no se acepta lo que propongo.

Con referencia estricta al artículo 6º, quiero recordar a los señores diputados que en el proyecto de ley presentado en 1926, esta disposición estaba redactada en los siguientes términos: «En caso de guerra nacional, las fracciones de la gendarmería nacional que actúen en los ejércitos en campaña o en las zonas declaradas de guerra, procederán de acuerdo con lo que el Código de Justicia Militar prescribe para comisarios de policía; y se considerarán partes integrantes de la reserva del ejército permanente». Con la misma redacción fué despachado por la comisión, según figura en la orden del día número 88, del mismo año 1926.

El artículo que actualmente propone la comisión, dice lo siguiente: «En caso de guerra nacional, las fracciones de la gendarmería nacional que no tengan destino de movilización en los ejércitos de campaña o en zonas declaradas de guerra, procederán de acuerdo con lo que el Código de Justicia Militar prescribe para «comisarios de policía». Como se observará, esta cláusula difiere fundamentalmente

del artículo del proyecto anterior, que decía todo lo contrario de lo que dispone el actual.

Para comprender el contrasentido que importa este artículo, conviene que los señores diputados que lo ignoran se enteren de quiénes son estos «comisarios de policía» a que se refiere el Código Militar.

El artículo 101 de ese código dispone que en tiempo de guerra «los generales en jefe de ejércitos en campaña, los jefes superiores de cuerpo, de divisiones independientes, etcétera, nombraron para el servicio de policía de las fuerzas a sus órdenes, el número de comisarios que consideren convenientes».

¿A quiénes se extiende la jurisdicción de estos «comisarios de policía» que actúan únicamente en caso de guerra y en la zona declarada de operaciones militares? Según el artículo 38 del mismo código, los «comisarios de policía» tienen jurisdicción, primero, sobre los postillones, vivanderos y vivanderas, cantineros y cantineras, lavanderas, comerciantes, sirvientes de los oficiales y cualesquiera otros individuos que acompañaren al ejército o hicieren parte de su comitiva; segundo, sobre los vagabundos y desconocidos. Este artículo está en el capítulo IV del título X del código, que trata «de la competencia en tiempo de guerra». Vale decir, que los «comisarios de policía» son para actuar exclusivamente en caso de guerra y en la zona donde tienen lugar las hostilidades, y no, como lo dispone este artículo, para las fracciones de gendarmería que por no estar movilizadas no formen parte del ejército.

Sr. Arbeletche. — Por el anterior despacho toda la gendarmería actual es como comisarios de policía en tiempo de guerra; el artículo que consideramos se refiere a la que no se movilice.

Sr. Cooke. — Lamento decir que la aclaración del señor diputado no me satisface, porque la gendarmería que, por ejemplo, quedare en un territorio del Sur cuando el ejército actuara en una guerra en el Norte, no podría tener funciones de «comisarios de policía», ya que el artículo 138 del Código Militar, que acabo de leer, establece que éstos actúan junto al ejército en operaciones, ejerciendo su jurisdicción sobre vivanderos, cantineros, lavanderas, postillones, etcétera.

Sr. Arbeletche. — Actúan en todos los sitios donde lo requiera la seguridad del ejército.

Sr. Cooke. — Actúan en una zona limitada. Yo abrevié la lectura de los artículos del Código Militar para no extender mi exposición. Pero estos «comisarios de policía» son funcionarios del ejército y no pueden ser funcionarios

de la gendarmería, que no forma parte del ejército.

Esta referencia al Código Militar que contiene el artículo 6º, plantea la oportunidad de referirse a la aplicación del Código de Justicia Militar mencionado en los artículos 7º y 8º.

Debo, ante todo hacer una consideración de carácter general. El autor del Código de Justicia Militar, doctor Bustillo, estampó en su frontispicio este aforismo: «El ejército y la armada, como institución que la necesidad mantiene, no encuadran bien en la Constitución.» Y para cohonestar su teoría con el código, tuvo necesidad de adoptar la doctrina de la «delegación de mando», doctrina que encontró justificada en el inciso 15 del artículo 86, de la Constitución, que atribuye al presidente de la Nación la calidad de comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y tierra.

Esa teoría de la «delegación de mando», teoría española que arranca de las ordenanzas militares de Carlos III, estaba en boga en España durante la monarquía, porque allí la soberanía emanaba del soberano y la jurisdicción judicial y militar se ejercía en nombre del monarca, no del pueblo, que es entre nosotros el soberano. Por absurda e insostenible no tiene entre nosotros ningún sostenedor calificado. Basta establecer que el artículo 95 de la Constitución, dice que «en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas»; que el artículo 18 establece que «ningún habitante de la Nación, puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa»; y finalmente, que el artículo 67 en su inciso 23, dispone que corresponde al Congreso «fijar las fuerzas de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y de guerra y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos»; basta, repito, establecer esto, para comprender que nuestro ejército y nuestra armada tienen, precisamente, en la Constitución, su más sólida cimentación.

No podía ser de otra manera. Si el artículo 21 de la Constitución obliga a todos los ciudadanos a armarse en defensa de la patria y de la Constitución, y si el artículo 67, inciso 23, establece que la organización de los ejércitos, desde el punto de vista de su reglamentación, corresponde al Congreso, —porque no se puede concebir la defensa de la patria y de la Cons-

titudin por el impulso inorgánico de los ciudadanos armados sino mediante la existencia de instituciones armadas legalmente organizadas y constitucionalmente dirigidas por el presidente de la República—, no se puede comprender cómo pudo sostenerse que el ejército y la armada están fuera de nuestra Constitución.

No hay, a mi juicio, instituciones que armonicen más con nuestros sentimientos republicanos y democráticos —que son la esencia de la Constitución—, que la escuela y el ejército. La escuela que plasma la naciente personalidad infantil, que modela y educa...

—Suenan la campanilla indicadora de la expiración del término reglamentario para usar de la palabra.

Sr. Cooke. — A los efectos de mi exposición, estoy hablando en representación del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Allperín. — No vamos a hacer cuestión al respecto, pero es evidente que el bloque de la Unión Cívica Radical está dividido en esta cuestión y dentro de unos momentos vamos a ver que otro señor diputado hablará también en nombre del mismo bloque.

Sr. Presidente (Vilgré la Madrid). — El señor diputado ha manifestado que habla en nombre de su bloque y sólo puede ser rectificado por el bloque mismo.

Sr. Cooke. — Efectivamente, señor presidente, la rectificación sólo puede provenir de mi sector.

Decía que la escuela y el ejército son las instituciones que mejor armonizan con la esencia de nuestra Constitución: la escuela por la educación y la cultura que da al niño, el ciudadano del futuro; y el ejército, porque vigoriza físicamente al ciudadano, le inculca hábitos de orden y de disciplina y le inspira el sentimiento de sus deberes y responsabilidades frente al Estado y sus conciudadanos.

Lo que no encaja, lo que no está dentro del marco de la Constitución, es el Código de Justicia Militar. Y voy a demostrar brevemente esta afirmación, que parece, causa extrañeza a mi distinguido colega el señor diputado Solá, no obstante que ya ha sido hecha en este mismo recinto.

Sr. Solá. — ¿El señor diputado sostiene que el Código de Justicia Militar viola alguna disposición constitucional?

Sr. Cooke. — Muchas...

Sr. Solá. — Es interesante.

Sr. Cooke. — Esta tesis fué sostenida en este mismo recinto por un diputado que fué auditor de guerra del ejército, el doctor Gatica, y fué corroborada entre otras exposiciones, por una del señor diputado de Tomaso, que se apoyaba en conceptos vertidos por militares cuyo juicio requirió la comisión especial que estudió el Código de Justicia Militar en 1926.

Sr. Solana. — Esa tesis parte de un error de origen, porque el Código de Justicia Militar no es tal código, sino un reglamento de disciplina.

Sr. Cooke. — El señor diputado sólo se fija en las palabras, cuando lo que hay que considerar son los hechos. Llámese ley de disciplina militar, como lo hace el proyecto del Poder Ejecutivo de 1926, llámesele código militar, el resultado es el mismo: es la ley que sanciona penalidades para delitos que pueden cometer los militares.

La confusión del señor diputado proviene del error corriente de creer que un código es una ley especial como la Constitución, que tiene características extraordinarias, cuando la verdad es que se trata de una ley corriente, como las tantas que dicta a diario el Congreso, aunque su modificación no sea tan fácil, porque siempre hay cierta resistencia a modificar las leyes de fondo.

Me voy a referir al aspecto de la inconstitucionalidad de la ley de justicia militar.

El artículo 18 de la Constitución establece que la propiedad es inviolable, la ley número 9.685, dice que el grado es una propiedad del oficial y la Suprema Corte ha ratificado este precepto en numerosos casos; sin embargo, el Código de Justicia Militar establece que el presidente de la República puede dar de baja a los oficiales del ejército, hasta teniente coronel inclusive, previo sumario, lo que significa que la propiedad del grado no es inviolable.

El artículo 18 de la Constitución dice que «nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo», y el Código Militar establece que el procesado debe declarar bajo promesa de decir verdad. La promesa de decir verdad para un hombre de honor —y los hombres de espada lo son por antonomasia— importa conducirlo a la situación de declarar contra sí mismo.

El artículo 18 de la Constitución dice que «nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso». Según el Código Militar los superiores jerárquicos, y el presidente de la República en determinados casos, pueden imponer penas hasta de arresto, castigar con confinamiento de cua-

tro meses a cinco años y recargo de servicios de uno a tres años.

El artículo 29 de la Constitución dice que no se puede conceder a ninguna autoridad «facultades extraordinarias», y, sin embargo, el Código Militar concede al comandante en jefe de las fuerzas el derecho de condenar hasta la pena de muerte.

Es perfectamente sabido que las resoluciones de los consejos de guerra en muchos casos no causan instancia. Pueden ser modificadas por los jefes de división y por el presidente de la República; no en el sentido del indulto o de la conmutación de la pena, que es la facultad corriente del Poder Ejecutivo, sino en el sentido del aumento de la pena. De donde resulta que el Código Militar viola el principio de derecho constitucional de la división de los poderes al concederle al presidente de la República facultades que le niega el artículo 95 de Constitución, que establece terminantemente que «en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas».

Finalmente, hay otra disposición constitucional, también del artículo 18, que establece la inviolabilidad de la defensa en juicio. En el Código Penal Militar la defensa en juicio está contemplada con una restricción tal que puede afirmarse que en realidad no existe. No hay garantía para el procesado ni libertad de acción para el defensor. El procesado no cuenta más que con dos recursos, el de transgresión a la ley y el de revisión, completamente restringidos, careciendo del recurso de apelación, que permite subsanar el error y reparar la injusticia del tribunal. En cuanto al defensor, no puede intervenir en las declaraciones que se presten fuera del tribunal y está sometido a una serie de restricciones que no están contempladas en el derecho común y que contrarían los principios constitucionales más elementales de lo que debe ser la justicia.

Sr. Urien. — ¿Si me permite el señor diputado?

La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado sobre ese aspecto de la cuestión y su decisión ha sentado jurisprudencia.

Recuerde el señor diputado el caso de la revolución de 1893, en que el coronel Espina, defendido por el doctor del Valle, alegó la inconstitucionalidad de esa parte del Código Militar y la Corte declaró que era perfectamente constitucional, porque primaba el delito militar so-

bre el delito político, que el doctor del Valle sostenía que era lo principal.

Sr. Cooke. — Yo contemplo este asunto desde el punto de vista de los principios del derecho constitucional.

El fallo de la Suprema Corte que ha citado el señor diputado puede ser muy interesante y muy respetable la doctrina que sostiene, pero es un simple fallo que no tiene siquiera el valor de la jurisprudencia, que importarían los fallos reiterados...

Sr. Solá. — No, señor diputado, hay reiteración de fallos que verdaderamente sientan jurisprudencia. Recuerde al señor diputado que la Suprema Corte ha llegado a considerar el Código de Justicia Militar como uno de los códigos comunes reservados a la jurisdicción provincial, a los efectos del recurso de apelación. De manera que solamente por vía del recurso extraordinario puede llegar la Corte a rever las sentencias de los tribunales militares.

Sr. Cooke. — Yo no he sostenido, señor presidente, que los fallos de los tribunales militares deban ser revistos por la Suprema Corte de Justicia y que el recurso de apelación que se puede conceder sobre los mismos tenga que ser forzosamente ante la Suprema Corte; sino que sostengo que debe existir un recurso ante otro tribunal militar superior. Y voy a demostrar al señor diputado las iniciativas que ha habido en ese sentido.

Sr. Solá. — Acepto la observación del señor diputado, pero debo agregar dos palabras para hacer notar que no es exacto que el fallo de la Corte a que se ha referido el señor diputado Urien esté solitario en el campo de la jurisprudencia; hay muchos fallos en que la jurisprudencia de la Corte no sólo ha considerado constitucional el Código de Justicia Militar, sino que lo ha equiparado a los códigos comunes, en cuanto al funcionamiento de los recursos de apelación y del recurso extraordinario.

—El señor diputado Fassi pronuncia unas palabras que no alcanzan a percibirse.

Sr. Piedrabuena. — La inconstitucionalidad surge, porque en el artículo 1º de la ley aprobada se declara que esta gendarmería no forma parte del ejército permanente de la Nación y la Corte ha declarado constitucional al Código de Justicia Militar, aplicando el artículo 67, inciso 23 de la Constitución, en cuanto faculta al Congreso para fijar la fuerza de línea y dictar los reglamentos y ordenanzas del ejército, de manera que si en este caso no se declara a

la gendarmería como parte integrante del ejército, no puede aplicársele constitucionalmente el Código de Justicia Militar.

Sr. Urien. — Cuando se discuta el artículo 7º, se verá la competencia de los tribunales militares.

Sr. Presidente (Vilgré La Madrid). — Continúa el señor diputado por Buenos Aires.

No acepte interrupciones el señor diputado y la Presidencia lo hará respetar en el uso de la palabra.

Sr. Cooke. — Acepto las interrupciones, porque sirven para aclarar el debate. Por otra parte, la preparación de los señores diputados Solá, Urien, Fassi y Piedrabuena, hace que me preste complaciente a esas interrupciones. Soy un hombre que no tiene la pretensión de que su palabra constituye el monopolio de la verdad. Apoyo mi opinión sobre esta materia, — porque en general, ella es extraña a las actividades de los abogados—, en las lecturas que he hecho y en opiniones autorizadas, algunas de las cuales referiré en forma limitada para hacer breve y sintética mi exposición.

—El señor diputado Solá hace una observación que no alcanza a percibirse.

Sr. Cooke. — El señor diputado podrá citar todas las sentencias de todos los tribunales que quiera. Yo he recorrido los fallos de la Corte y no he encontrado ninguno que contrarie, en el fondo, mi tesis. El Código de Justicia Militar está fuera de la Constitución. En el tiempo de su sanción existía la teoría de la «delegación de mando» incorporada a nuestra legislación tomándola de la antigua legislación española, que consiste en suponer que la justicia militar es una delegación de mando del presidente de la República, invocando el concepto español, según el soberano es el monarca y la justicia militar se ejerce en su nombre.

Sr. Urien. — El señor diputado confunde fueros con jurisdicción.

Sr. Cooke. — El señor diputado Urien. por su carácter de catedrático...

Sr. Urien. — No lo soy de esta materia.

Sr. Cooke. — ...está acostumbrado a tratar a los demás como discípulos. Tengo un gran respeto por su preparación, pero en esta materia no me considero su discípulo.

Sr. Videla Dorna. — Todas estas observaciones se están haciendo con respecto al artículo 6º del proyecto en discusión.

Sr. Cooke. — Expresé que como este artículo está relacionado con el 7º y 8º, y como iba a proponer la supresión de estos artículos y su

substitución por uno nuevo, iba a hacer este análisis con respecto a todos ellos.

Sr. Videla Dorna. — No está en cuestión la constitucionalidad del Código de Justicia Militar sino el artículo 6º, por cuanto crea de entrada la situación. Dice: «En caso de guerra». Y en caso de guerra no hay fallos ni nada que valga.

Sr. Cooke. — El análisis que hago del Código Militar, es para llegar a la comprobación de cómo no puede aplicarse a la gendarmería ese código.

Sr. Videla Dorna. — Yo quería hacer la aclaración.

Sr. Cooke. — Y quiero advertir a los señores diputados, sobre todo a los que me han hecho objeto de este amable tiroteo de preguntas e interrupciones, que el derecho militar norteamericano está encuadrado absolutamente dentro de su Constitución y que el Código Militar alemán —que podría tomarse como elemento de comparación y que regía en los tiempos casi autocráticos del kaiser— según opinión de militares franceses, entre otros, el general Langlois, que puso prólogo a una obra muy conocida del capitán Arnolet, sobre la justicia militar alemana, es un Código Militar perfectamente encuadrado en los principios de nuestra Constitución.

Nuestro código no ha evolucionado, se ha quedado estancado, no ha seguido el movimiento de renovación de que tienen necesidad todas las leyes para actualizarse de acuerdo al desenvolvimiento de las instituciones.

No puedo votar como legislador, señor presidente, la aplicación del Código Militar, que considero inconstitucional, a nuevos ciudadanos, formen o no parte del ejército, tengan o no estado militar. Pero estas consideraciones, en realidad, son de carácter principista. Quiero colocarme en la situación de hecho que nos plantea nuestro derecho positivo.

Cuando el señor diputado Solana expuso, —con esa sencillez y modestia que son una característica de su personalidad—, sus dudas sobre el aspecto de la ley en cuanto a la aplicación del Código Militar, insinuó la posibilidad de que fuera inconstitucional aplicar este Código Militar al personal de la gendarmería, por lo dispuesto en los artículos 117 y 118 del Código Militar. Declaro que el señor diputado Solana estaba en una duda que a mi juicio no corresponde. Costaba, por otra parte, creer que un constitucionalista tan eminente como Matienzo pudiera incurrir en el grueso error que importaría extender la jurisdicción del Código Militar al personal de la gendarmería.

Lo que la Constitución prohíbe —como expresara el señor ministro del Interior, cuyos puntos de vista comparto— es que «nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho, ni procesado o juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales designados por la ley antes del hecho de la causa». Pero nada se opone a que por otra ley se haga extensivo el Código Militar a nuevos ciudadanos, en la misma forma que el Código Militar establece que sus disposiciones son también...

Sr. Susan. — La interpretación del señor ministro no significa que quedarán bajo la sanción del Código de Justicia Militar, pues se refiere a los reglamentos de disciplina pertinentes, y en eso coincide con el señor diputado Solana.

Sr. Cooke. — Esa es otra confusión de palabras en que se incurre, a mi juicio, equivocadamente. Las leyes y reglamentos de disciplina que rigen en el ejército son, fundamentalmente, el Código Militar.

Sr. Susan. — Sí, es el Código Militar; el doctor Matienzo se refiere a él.

Sr. Cooke. — Yo no he citado la opinión del doctor Matienzo en ese sentido...

Sr. Susan. — Se refiere a que ese proyecto de Matienzo no atañe en nada al Código de Justicia Militar.

Ahora, si el señor diputado entiende que lo que se refiere a reglamentos pertinentes es lo mismo que Código de Justicia Militar, estamos de acuerdo.

Sr. Cooke. — De cualquier manera mi afirmación es exacta. El ex ministro Matienzo, en el proyecto del Poder Ejecutivo, incluía en las leyes militares a este personal de la gendarmería.

La tesis de que por una ley pueda hacerse extensivo el Código Militar a ciudadanos civiles, tiene ya su principio de aceptación en el mismo código, cuando establece que quedan sometidos a sus disposiciones los penados que extingan condena en establecimientos sujetos a vigilancia militar, los civiles asimilados al ejército y los estudiantes de las academias militares.

Sr. Arbeletche. — Hay artículos del código que establecen que aun los civiles no asimilados están bajo sus disposiciones.

Sr. Cooke. — En caso de guerra, exclusivamente, los civiles no asimilados; pero yo estoy hablando en caso de paz, para tiempos normales, para no complicar el asunto.

No hay inconveniente, y lo demuestra un

principio aceptado en otras legislaciones, que la gendarmería esté sujeta al Código Militar, pero el hecho de que no exista un inconveniente de orden legal no quiere decir que no constituya un error de derecho, teórico o doctrinario, el incluir dentro de las disposiciones del Código de Justicia Militar, que es un código de excepción, a ciudadanos que no forman parte del ejército y que no tienen estado militar.

Sr. Allperín. — La jurisdicción es creación de la ley.

Sr. Cooke. — Precisamente, esa es la teoría: la jurisdicción es creación de la ley, y lo que la Constitución prohíbe es juzgar a nadie sin ley anterior al hecho del proceso.

La circunstancia de que no sea inconstitucional la inclusión de la gendarmería en el Código Militar, no significa que no importe un serio y grave error extender a la gendarmería, que no forma parte del ejército en épocas normales y cuyo personal no tiene estado militar, la aplicación de la justicia militar. Es un error evidente, que no existe en ninguna legislación. En Francia y en Chile, los carabineros forman parte del ejército y, asimismo, existen restricciones con respecto a ellos para aplicarles el Código Militar; limitaciones que no han sido contempladas en esta ley.

Refiriéndome a otros aspectos que a mi juicio hacen inconveniente la aplicación del Código Militar al personal de la gendarmería, mencionaré, en primer término, el que deriva de las características de la misma, expresado en el diario «La Prensa», en un editorial que ha sido citado varias veces, y en el que se dice que importa un contrasentido que el personal de una gendarmería que no forma parte del ejército, bajo las órdenes de civiles, pueda cometer delitos que van a ser juzgados por funcionarios del Ministerio de Guerra, con aplicación del Código de Justicia Militar.

Y está, también, la disposición del artículo 10 de este proyecto que expresa: «El Poder Ejecutivo queda autorizado para incorporar a la gendarmería nacional el personal de policía marítima, guardiacárceles, o parte de los mismos, así como el personal de aduana que ejerza sus funciones dentro de la jurisdicción de las inspecciones determinadas por el artículo 14.»

Quiere decir, pues, que por un decreto del Poder Ejecutivo puede incorporarse a esta gendarmería y someterse a la jurisdicción del Código Militar, a funcionarios o empleados que llevan quince o veinte años de actuación eminentemente civil y que serían imperiosa-

mente colocados, en contra de su voluntad, bajo la jurisdicción militar, o en la situación de perder sus años de servicio.

Sr. Labayen. — Un ciudadano que va a tomar plaza en ese cuerpo, sabe que va a estar sometido al régimen del Código Militar para los delitos que cometiera.

Sr. Cooke. — El personal de la gendarmería que se va a crear, sabe que al entrar en ella está bajo la ley militar; pero quienes forman parte de cuerpos civiles, como son el cuerpo de guardiacárceles o el personal aduanero — hablo hipotéticamente porque supongo que los señores ministros no han de incorporar personas que no posean las debidas condiciones —, podrían ser incorporados por un decreto a la gendarmería y quedar sometidos contra su voluntad a la ley militar o verse en el caso, como dije, de renunciar.

Sr. Labayen. — El señor diputado está hablando de un caso hipotético: en virtud de un decreto que se dictara...

Sr. Cooke. — Es un caso previsto por el artículo 10.

—El señor diputado Labayen pronuncia algunas palabras que no alcanzan a percibirse.

Sr. Cooke. — No le he oído al señor diputado.

Sr. Presidente (Vilgré La Madrid). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cooke. — La extensión de la competencia del código a los militares que cometen delitos comunes en actos de servicio o en lugares militares, ha motivado en los tratadistas de la materia una larga discusión.

En el extranjero tenemos los siguientes antecedentes. La ley francesa del 20 de septiembre de 1791, establecía: «Ninguna persona está fuera de la ley común, ni de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, bajo pretexto de servicio militar. Todo delito que no afecte inmediatamente el deber, la disciplina o la obediencia militar, es un delito de derecho común cuyo conocimiento pertenece a los jueces ordinarios».

Sosteniendo este mismo principio decía Napoleón I, ante el Consejo del Estado: «La justicia francesa es una, pues antes de ser soldados, somos ciudadanos». En consecuencia con estas opiniones, en el acta constitucional del Imperio, de 1815, se estableció que los delitos militares son los únicos del resorte de los tribunales militares.

Yo no voy a pretender que esta doctrina esté

universalmente aceptada. Existen códigos militares que mantienen en la actualidad el principio de la indivisibilidad de su aplicación; pero aun en nuestro país este asunto ha motivado serias discusiones y se ha propugnado la exclusión de los delitos comunes de la jurisdicción militar. Esta tesis ha sido sostenida por distinguidos militares: el general Vaccarezza, el teniente de navío Cueto y el ex auditor de guerra, general de brigada asimilado, Risso Domínguez.

En el proyecto de ley de disciplina militar que remitió el Poder Ejecutivo el 1º de julio de 1926 —mensaje del presidente Alvear firmado por el general Justo y el contraalmirante Domecq García—, se decía lo siguiente: «El proyecto de ley acompañado se basa en la substitución de los actuales consejos de guerra permanentes por jueces letrados, en la modificación del carácter de tribunal de casación por el de apelación del Consejo Supremo de Guerra, y en la exclusión del conocimiento de la jurisdicción militar de los delitos comunes que no afectan a la fuerza armada, estableciéndose que tales delitos comunes cometidos en hechos de servicio o en lugares consagrados a la jurisdicción militar cuyo juzgamiento corresponde actualmente a la justicia militar, serán en adelante juzgados por la justicia federal».

Ya ven los señores diputados cuánto atraso contiene nuestro Código de Justicia Militar con respecto a las opiniones emitidas por militares en el año 1926, en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Los cuarteles que va a ocupar la gendarmería, los locales de sus destacamentos, los depósitos, los lugares de sus instalaciones, etcétera, serán también «lugares militares», porque la ley no contiene más excepción que la que enuncia la primera parte del artículo 8º.

El señor ministro del Interior nos citaba en sesiones anteriores la opinión del profesor francés Pierre Hugueney y con ese motivo mencionó el artículo 3º, apartado 6º, del Código de Justicia Militar francés, que dice que los gendarmes «no son justiciables por ante los tribunales militares por los crímenes y delitos cometidos por ellos en el ejercicio de sus funciones relativas a la policía judicial y a la comprobación de contravenciones en materia administrativa.»

El artículo 8º del proyecto de ley que está en discusión, dice: «Los delitos y faltas cometidos por los particulares contra el personal de la gendarmería en ejercicio de sus funciones, se considerarán como realizados contra la policía». ¿Y los que cometa la policía o la gendarmería con-

tra los particulares, serán del resorte de la justicia ordinaria o de la justicia militar? Sostengo que serán del resorte de la justicia militar, porque esta ley no contiene la excepción, que establece, precisamente, el referido artículo 3º, apartado 6º del código francés que leyó el señor ministro del Interior; de donde resultará que el personal de nuestra gendarmería, que no forma parte del ejército y que no tiene estado militar, estará en peores condiciones que el personal de la gendarmería francesa, que forma parte del ejército.

Sr. Susan. — El personal de la gendarmería francesa es juzgado militarmente y cae bajo las sanciones de la justicia militar francesa.

Sr. Cooke. — En cuanto a los delitos militares, únicamente. ¿Y el personal de nuestra gendarmería, en cuanto a los delitos comunes?

Sr. Fassi. — Si me permite, le voy a aclarar.

Sr. Cooke. — Por lo pronto es una ley que necesita muchas aclaraciones.

Sr. Fassi. — De acuerdo al artículo 7º, segundo apartado, el Código de Justicia Militar...

Sr. Cooke. — Ya sé la cuestión que me va a hacer.

Sr. Fassi. — ... atiende exclusivamente a los casos de disciplina.

Sr. Cooke. — El señor diputado me va a hacer la cuestión casuística de que la disciplina no es el Código Militar.

Sr. Fassi. — Es que se trata de un caso en que hay que hacer la cuestión casuística.

Sr. Cooke. — Le voy a demostrar que la disciplina es el Código Militar, porque no hay en el ejército leyes distintas.

Sr. Fassi. — Si el señor diputado lee el Código de Justicia Militar, libro II, verá cómo hace distingo exacto de las infracciones que se refieren a la disciplina y dedica el libro III a otras cuestiones que no se aplicarán a los gendarmes. Basta esta consideración para darse cuenta de inmediato de que la cuestión que plantea el señor diputado no perjudicaría en forma alguna a los particulares.

Sr. Güiraldes. — Si me permite el señor diputado, querría decirle que para los militares, para los propios soldados del ejército, se presentan situaciones que no caen bajo la jurisdicción militar, cuando un conscripto, fuera del cuartel comete un homicidio o produce lesiones a un particular sin estar cumpliendo un acto de servicio, cae bajo el dominio de la justicia común. Así lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación —tal vez en un solo fallo, no sé si hay otros—; esa es la

doctrina del tribunal que interpreta la Constitución y las leyes con la autoridad más alta, y sus decisiones causan jurisprudencia mientras no haya fallos contradictorios.

Sr. Cooke. — El principio de nuestra ley en esa materia es que el delito común cometido en lugares militares o en actos de servicio, cae bajo el Código Militar. Pero la función del ejército está restringida específicamente dentro de límites estrechos, mientras que la función de la policía es muy amplia porque debe tener contacto diario con el público y debe actuar en todos los ámbitos.

A mi juicio, el personal de la gendarmería, en cuanto a los delitos comunes cometidos en actos de servicio, estaría expuesto a cada instante a las sanciones del Código Militar.

Sr. Susan. — El Código de Justicia Militar determina cuáles son las situaciones que caen bajo la jurisdicción militar.

Sr. Pizarro. — La jurisprudencia de la Corte es terminante: el delito común aun cometido por un militar, aun en actos de servicio, no cae bajo la jurisdicción militar sino que es de la competencia de los tribunales comunes. Y puedo citar el caso de un cabo conscripto, acusado de violación de correspondencia en un hospital militar, substrayendo valores y falsificando las firmas, en el que se consideró que no había cometido sino el delito de defraudación y que no correspondía juzgarlo a la justicia militar, ni aun a la justicia federal, sino a la justicia ordinaria, por resolución de la Suprema Corte.

Sr. Cooke. — Voy a continuar mi exposición, señor presidente.

Sr. Presidente (Vilgré La Madrid). — Señores diputados: la Presidencia no va a consentir mas interrupciones, interpretando que ése es el deseo del señor diputado por Buenos Aires, que está en el uso de la palabra.

Sr. Videla Dorna. — Sería oportuno rogar al señor diputado que no aceptara interrupciones, porque con ellas se alarga extraordinariamente el debate. El señor diputado está en el uso de la palabra para referirse a un solo artículo que está en discusión, y vea la hora que es.

Sr. Cooke. — Es una amabilidad que creo debo tener para con los señores diputados que pertenecen a otros sectores y que desean rectificar mis opiniones; pero, ante la observación del señor presidente, no voy a aceptar más interrupciones.

Por otra parte, no voy a hacer más referencias a este punto, que es incidental en mi expo-

sición, porque tengo algún temor de que se haga de este asunto uno de esos debates de abogados en el que finalmente no es posible entenderse.

Otro aspecto del Código Militar que hace inconveniente su aplicación al personal de la gendarmería es la rigurosidad de las penas, de que es ejemplo la profusa mención de la pena de muerte, que aparece desde el principio hasta el fin del código, y cuya aplicación persiste aún después de suprimida en el Código Penal.

Es un inconveniente, también, la falta de flexibilidad de las penas porque, de acuerdo con el artículo 564 del Código Militar, los consejos de guerra tienen que tomar como norma de aplicación el término medio de la pena y regularla hasta el máximo o mínimo según circunstancias agravantes o atenuantes; por regla general no pueden, pues, adaptar sus resoluciones al caso, a la persona y a la naturaleza del delito.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Desde 1913, diversos consejos de guerra han solicitado en sus informes al ministerio se suavicaran las disposiciones de la ley, su benignidad, la flexibilidad de las penas y otras mejoras que evitasen a los consejos de guerra tener que recurrir confidencialmente al Poder Ejecutivo para solicitar indultos. Porque los jueces militares son jueces humanos, que tienen buenos sentimientos, pero están trabados, diré así, por la severidad de las ordenanzas militares que no tienen más remedio que aplicar.

A mi juicio el Código Militar es un código anticuado, injusto, falto de garantías y erróneo en sus concepciones jurídicas. Pudo haber sido necesario antes, cuando nuestro ejército se componía de soldados enganchados, muchos de ellos reclutados en lugares poco recomendables, aunque constituyeron ese glorioso ejército que mantuvo intangible nuestra soberanía nacional y que conquistó, a los salvajes, el desierto. Pero la ley de servicio militar obligatorio produjo una transformación esencial en nuestro ejército y al cambiar el elemento humano cambió su psicología, no obstante lo cual el Código Militar ha seguido inmutable; no ha sufrido las modificaciones ni las variaciones que han experimentado las instituciones armadas.

En cuanto a las penas a que me refería hace un rato, existen las penas por los delitos y

los castigos por las faltas. En el capítulo de los castigos por las faltas se viola nuevamente, a mi juicio, la disposición constitucional del artículo 18, cuando dice que quedan abolidos para siempre toda especie de tormentos, porque el Código Militar establece como castigo para las faltas, el plantón, la barra, la cofa y el arresto en el cuarto de las banderas, que es un tormento moral para la dignidad del oficial.

Sé, señor presidente, que se me argüirá que esos castigos no se aplican...

Sr. Labayen. — No se aplican ya, señor diputado.

Sr. Cooke. — ...lo reconozco; pero es evidente que no se aplican porque un sentido de la dignidad profesional ha hecho que caigan en desuso. Esos castigos existen en el código, y los oficiales que actuarán en lugares aislados no tendrán al respecto más límite que el de su buen criterio y sentimiento. Por eso creo que habría sido mejor para la gendarmería un reglamento propio de faltas, como el que tiene la Real Policía Montada de Canadá, y hasta quizá hubiese sido conveniente hacer el ensayo de ese juramento individual que parece es una de las mejores garantías de la eficacia de la disciplina en ese cuerpo.

Comprendo que apliquemos las disposiciones de las leyes militares a los efectos de la organización y preparación de la gendarmería, pero no concibo que las apliquemos en cuanto a su disciplina. Se trata de una gendarmería que tiene, además, como misión accesoría, fundar escuelas, colonias, establecer oficinas de registro civil y servicios aduaneros; y el señor ministro, si no recuerdo mal sus palabras, nos decía —o lo he leído en uno de los mensajes del Poder Ejecutivo— que esa policía no debe actuar con el rigorismo severo de la disciplina militar. No obstante, a su personal se le aplicará el rigorismo severo del Código Militar.

Por estas consideraciones propongo la sustitución de los artículos 6º, 7º y 8º, por uno nuevo que voy a pasar a la Secretaría y que dice...

Sr. Arbeletche. — ¿Me permite una pregunta?

Sr. Cooke. — Sí, señor diputado.

Sr. Arbeletche. — ¿Su oposición a ese artículo 6º consiste en que considera que no debe aplicarse en ningún caso el Código de Justicia militar?

Sr. Cooke. — No, señor diputado.

Sr. Arbeletche. — Quisiera que aclare el concepto.

Sr. Cooke. — Por la lectura que voy a hacer, podrá apreciar el señor diputado el alcance de mi proposición.

Dice el artículo que propongo: «En todo lo que se relacione con su instrucción, su personal estará sometido a las leyes y reglamentos establecidos para el ejército, como asimismo a los que el Poder Ejecutivo dicte para su servicio especial.» Es la primera parte del artículo 7º. Y sigue: «En caso de guerra nacional, la gendarmería podrá tener destino de movilización en los ejércitos de campaña o en zonas declaradas de guerra, en cuyo caso las fracciones movilizadas se considerarán parte integrante de la reserva del ejército permanente.»

No digo nada del Código Militar, porque desde el momento que la gendarmería entre a formar parte del ejército permanente, automáticamente queda comprendida dentro del Código Militar. Establezco en mi artículo que la preparación y organización de la gendarmería se hará por las leyes militares. Limito su calidad de policía militarizada a ese aspecto de su organización; establezco su carácter de reserva permanente del ejército en caso de guerra, y elimino, como he dicho, la aplicación del Código de Justicia Militar, cuyos inconvenientes e inconstitucionalidad he expuesto, para el caso normal de la actuación policial de la gendarmería en tiempo de paz.

Comprendo que queda en pie la cuestión fundamental de cómo se mantendrá la disciplina en esa gendarmería. He leído las opiniones de los hombres que creo pueden hablar sobre disciplina, opiniones expuestas por altos jefes militares, algunos de ellos que gozan de gran prestigio y consideración en el sector de la derecha, por su notoria actuación en los acontecimientos políticos de los últimos años.

Los conceptos de estos militares, coinciden en que la disciplina verdadera no se impone por la fuerza, sino que es el resultado de la compenetración del superior con el subalterno a base de la reflexión, el ejemplo y el respeto que conquista siempre la superioridad intelectual, técnica y moral. Para el buen militar el mejor soldado no es el autómatas que obedece al rigor o al temor, sino el que observa la disciplina espontáneamente, porque reconoce en sus superiores capacidad de juicio, de dirección y corrección para juzgar.

A mi juicio, la eficacia de la disciplina va a resultar de las mismas disposiciones de la ley, del artículo 21, que establece las condiciones de ingreso a la gendarmería, y que por sí sólo importa un proceso de selección. Re-

sultará, además, de la calidad militar de sus jefes y oficiales, de la aplicación del reglamento del ejército en cuanto a su instrucción y de su organización por el Ministerio de Guerra.

Las dificultades que deberá afrontar el personal de la gendarmería en las regiones apartadas del país en su lucha con la delincuencia, no pueden ser superiores a las dificultades y riesgos que afronta a diario el personal de la policía de la Capital, en su lucha contra pistoleros —criminales científicos, fríos y calculadores— cuya peligrosidad es tan grande o quizá mayor que la de los bandoleros fronteziros.

He consultado, además, opiniones de viejos y acreditados empleados de policía, nacionales y provinciales, y ninguno me ha referido un solo caso de que un subalterno haya eludido el cumplimiento de la consigna por grave y riesgosa que haya sido la misión encomendada.

Todos ellos han coincidido en estos conceptos que voy a concretar, para terminar mi exposición —y con el debido respeto por la opinión contraria que pudiera merecer a los señores ministros— en los siguientes términos: Buena instrucción y organización, buen armamento, buenos medios de movilidad, buenos jefes y oficiales, buena paga y puntual, y trato humano; y confiemos, señor presidente, en que los argentinos que formen parte de la gendarmería no necesitarán esa letanía fúnebre de la pena de muerte que campea en el Código Militar desde el principio hasta el fin, para cumplir con lealtad y patriotismo la misión de civilización y de seguridad pública que les encomendamos por esta ley.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Ministro de Guerra. — Pido la palabra.

Me voy a limitar a dar la interpretación del artículo 6º, y sólo cuando lleguemos a los artículos 7º y 8º me haré cargo de los conceptos vertidos sobre ellos.

De la lectura de la primera parte del artículo 6º se desprende que en caso de guerra nacional habrá fracciones de la gendarmería con destino de movilización en los ejércitos en campaña o en las zonas declaradas de guerra y que habrá otras unidades que no tendrán ese destino y que desarrollarán la función normal de policía.

Para poder interpretar bien este artículo, necesito referirme a las previsiones que tenemos nosotros para la guerra, y lo que establecen los reglamentos en todo lo que se relaciona con la policía del ejército en tiempo de guerra.

Esta policía estará a cargo de unidades que se denominan unidades de gendarmería de campaña, movilizadas recién cuando la guerra ha sido declarada. Voy a leer algunas disposiciones del reglamento de conducción y combate sobre esta gendarmería.

Dice el reglamento: «La gendarmería de campaña es adscripta a los comandos superiores para ejecución de misiones de policía en la jurisdicción respectiva». Por regla general se tendrá que agregar a cada comando secciones de gendarmería de campaña al mando de un oficial (éstos son los comisarios de policía a que hace referencia el código). Al mismo tiempo se necesitan unidades mayores de gendarmería de campaña, escuadrones, que son empleadas por el comando en jefe, etcétera. La gendarmería de campaña ejerce su acción preferentemente (dice preferentemente porque en su acción, la guerra abarca todo el territorio del país), en las espaldas de las tropas combatientes y allí donde los soldados salen de sus unidades o se pierden de ellas. Su autoridad se extiende sobre todos los miembros del ejército, así como sobre la población. La misión de la gendarmería de campaña comprende: el mantenimiento del orden, el servicio de vigilancia y el servicio de tráfico. Sobre estos tres órdenes se desarrolla la acción policial.

Este servicio de policía del ejército, señor presidente, es de suma importancia, porque gracias a él, se asegura el orden en la retaguardia del ejército de campaña. Sus atribuciones y competencia están establecidas en el Código de Justicia Militar en los artículos que se han leído, 101 a 103 para los comisarios de policía, y 138 y 139 en lo referente a competencia.

Pero este servicio de policía tal cual se va a desarrollar de acuerdo con las previsiones actuales, con unidades de gendarmería movilizadas recién cuando la guerra se declare, va a ser en sus comienzos poco eficiente. Se trata de unidades que no han sido convenientemente instruidas y que por otra parte carecen de su instrucción especial de policía.

Lo que se quiere con el artículo 6º en esta primera parte de la gendarmería nacional que tiene destino en el ejército, en operaciones y en la zona declarada de guerra, es que en lugar de crear las unidades de gendarmería de campaña en caso de guerra, se utilicen a estas unidades ya organizadas en tiempo de paz, perfectamente bien instruidas, sobre todo en su función principal de policía, afectándolas a las divisiones de ejército, comandos de ejército,

para desarrollar en sus zonas de acción la función de policía del ejército.

Pero hay otra parte de la gendarmería, porque el ejército no va a absorber completamente la gendarmería nacional. Esta otra parte de la gendarmería va a desarrollar su función normal de policía en los territorios nacionales, precisamente en zonas fronterizas. Como dije recién que la guerra en su acción abarca todo el país, esta policía, alejada de la zona donde opera el ejército, con fronteras cuya vigilancia es de suma importancia, exige por razones de necesidad militar, también dentro del concepto de jurisdicción y competencia de que he hablado anteriormente, que se desenvuelva en su acción lo mismo que la otra gendarmería que se ha afectado al ejército en campaña.

A eso responde lo que el artículo 6º establece: que procederán de acuerdo con lo que el Código de Justicia Militar prescribe para los comisarios de policía.

Cabe señalar, señor presidente, que en estas condiciones ambas partes de la gendarmería, aquella con destino de movilización en la zona declarada de guerra y la otra que también tiene destino de movilización en zonas fronterizas, van a desarrollar un servicio de índole esencialmente militar. Es por eso que la última parte de este párrafo que he leído sienta un principio general cuando dice que «todo el personal de gendarmería que preste servicios militares en caso de guerra, se considerará parte integrante de la reserva del ejército permanente.»

Este artículo, en mi opinión, debe aprobarse tal cual ha sido redactado. Al colocársele en este proyecto de ley se persigue como finalidad primordial que las autoridades encargadas de la movilización del ejército en caso de guerra no disuelvan la gendarmería nacional, es decir, que su personal no lo distribuyan dentro de las unidades combatientes que la movilización general ha previsto, sino que se la utilice para los servicios de la policía del ejército y para vigilancia especial de índole militar en las regiones fronterizas.

Creo, señor presidente, que no está demás recordar que en caso de guerra, serán las necesidades que ésta crea las que determinen el empleo que se va a dar a la gendarmería nacional y que la ley marcial se substituye a todas las leyes atinentes a la organización preexistente al estado de guerra.

Nada más. (*¡Muy bien!*)

Sr. Susan. — Pido la palabra.

En su oportunidad, expresé categóricamente que al formularse el despacho de la comisión, se

había hecho la reserva de que si hubiera asuntos que a juicio de alguno de los miembros pudieran modificar el concepto que sobre los fines de esta ley se tuviera, tendríamos una relativa libertad para oponernos en este recinto, y así lo hicimos, porque creíamos que había llegado esa situación en lo referente al artículo 1º y que algunos diputados de la comisión votaron aceptando el agregado propuesto por el señor diputado Repetto.

En este punto la comisión va a mantener íntegro el texto del proyecto porque las razones que ha dado el diputado impugnante no le satisfacen. No han tenido la fuerza que, a nuestro juicio, tuvieron los argumentos dados en el caso anterior. Ha citado como fuerza de su argumentación, el pensamiento de hombres que se han dedicado al estudio de esta cuestión del Código de Justicia Militar y en la comisión también en su oportunidad se ha debatido y no se ha concretado una impugnación seria que significase una disidencia expresa.

La comisión viene respaldada, en este caso, por la autoridad indiscutible de hombres que estudian y conocen la Constitución como el ex ministro Matienzo, que presentó un proyecto que es terminantemente igual al que en este momento la comisión ha informado en mayoría. También viene respaldado por el pensamiento y la aprobación de hombres estudiosos en materia constitucional, de militares que conocen los términos del Código de Justicia Militar y, en último caso, viene respaldado, también, sino con el pensamiento claramente expresado, por lo menos, con la aprobación tácita manifestada en el Senado de la Nación, últimamente, por dos hombres que defienden siempre los textos constitucionales, en su letra y en su espíritu, como los senadores Eguiguren y Palacios, que han concurrido a las sesiones en que se debatió este despacho y no han hecho objeciones de ninguna naturaleza. Estos son elementos que han gravitado en nuestro espíritu para aceptar el proyecto de ley que ha sido presentado y está a estudio de la Honorable Cámara.

Sr. Arbeletche. — Pido la palabra.

En mi carácter de miembro de la Comisión de Guerra y Marina, en cuanto se refiere al artículo 6º del despacho, ratifico los conceptos emitidos por mi compañero de representación.

Las objeciones que pudieran hacerse a este artículo, en realidad, no tienen ninguna importancia. En todas las movilizaciones, en caso de guerra, se busca siempre utilizar al ciudadano o al conjunto de ciudadanos en los servicios en que tengan mayor eficacia, es decir, en los

que tengan mayor similitud con las actividades que ejercen en tiempo de paz.

El artículo 6º, establece que la gendarmería actuará en caso de guerra como los comisarios de policía, y de acuerdo a lo que dicen los artículos 102, 103, 138, 139 y 500 a 502 del Código de Justicia Militar. La diferencia entre el despacho anterior firmado en 1926 por los miembros de la Comisión de Guerra y Marina, pertenecientes a todos los sectores, y el actual, se refiere a la cantidad, no al fin del artículo 6º. En aquel entonces, se establecía que sería utilizada como comisarios de policía la totalidad de la gendarmería, mientras que ahora se establece que las fracciones no utilizadas para otro destino en la movilización, tendrán funciones de comisarios de policía. No tiene este artículo ninguna gravedad. Los comisarios de policía actúan, como dice el código, en los frentes y flancos y donde sean necesarios para la seguridad del ejército, de manera que pueden actuar en toda parte del territorio que considere conveniente el comando.

Con estas breves palabras, y sin referirme, por ahora, a los artículos 7º y otros, mencionados por el señor diputado impugnante, voy a mantener mi firma en el despacho.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 6º del despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

— En discusión el artículo 7º.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

En resguardo de principios fundamentales de derecho público y salvando escrúpulos de carácter doctrinario, intervengo en esta discusión dejando expresa constancia de la deferente consideración que me merecen los señores diputados que subscriben el despacho y en especial me refiero a los señores diputados Castex, Susan y Arbeletche, compañeros de sector que han subscripto el despacho que impugno, estudiándolo con toda dedicación.

Y he de tratar de hacerlo con la mayor sobriedad posible, ateniéndome a los textos legales y refiriendo con discreción la opinión de los grandes tratadistas argentinos del pasado, de cuyas luminosas doctrinas nos estamos alejando indefinidamente.

Impugno el artículo 7º y su correlativo 8º en cuanto establece que en lo relativo a la disciplina los miembros de la gendarmería estarán sometidos al régimen del ejército y en consecuencia, su personal comprendido en lo prescripto para los militares en el Código de Jus-

ticia Militar. A estos fines, y como no deseo hacer dos exposiciones, que extenderían en demasía este debate, formulo conjuntamente mis observaciones al artículo 8º en cuanto establece que a los delitos y faltas cometidas por particulares contra el personal de la gendarmería, les corresponderá en algunos casos la aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar, porque, en general, el artículo establece categóricamente que los delitos y faltas cometidos por los particulares contra el personal de la gendarmería en ejercicio de sus funciones, se considerarán como realizados contra la policía, disposición que no merece observación alguna.

Mi observación radica, señores diputados, en la extensión de los principios del Código de Justicia Militar a la gendarmería, en lo que se refiere a su régimen disciplinario y a las relaciones de los particulares con la gendarmería en los casos de aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar.

Corresponde observar ante todo, que el Código de Justicia Militar, implica una jurisdicción de excepción, limitada estrictamente al cumplimiento de las grandes funciones militares. Se refiere al ejército, como institución específicamente militar, para mantener su régimen de cohesión y de disciplina, porque no he de pensar que se ha pretendido —cómo iba a pensarlo observando las firmas que subscriben este proyecto— aplicar el régimen de la ley militar en los territorios nacionales, en los cuales se encontrase radicada la gendarmería nacional, o en las relaciones de los particulares con ella. Es una hipótesis que no quiero plantearla porque me parece absurda.

Este proyecto rompe la unidad jurídica de nuestro régimen positivo: establece la extensión de principios limitados y de un fuero excepcional como es el de orden militar, a la gendarmería. Y ya se ha dicho por el señor diputado Susan, ilustrado miembro informante de la Comisión de Guerra y Marina, que la gendarmería no es un cuerpo de ejército y que sus individuos no tienen estado militar. Lo mismo fué manifestado por el señor ministro del Interior, a cuyas palabras me refiero como la mejor demostración de que la aplicación del Código de Justicia Militar es imposible a la gendarmería sin la declaración previa de que se trata de un cuerpo de ejército.

Al amparo de viejos principios de orden jurídico que constituyen el patrimonio de nuestra civilización, me opongo a la aplicación del ré-

gimen de excepción del Código Militar por ser innecesario a los efectos de la disciplina, por romper la unidad jurídica de la ley común y porque viola en cierta manera el artículo 18 de la Constitucional nacional que, con las limitaciones conocidas, dice: «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa».

Esta jurisdicción de excepción está limitada exclusivamente a las necesidades militares. Lo dijo un viejo maestro del derecho, el doctor Moreno, cuando defendió al general Mitre con motivo de la revolución de 1874. La doctrina del doctor Moreno es ésta: Solamente son susceptibles de ser llevados a los consejos de guerra los militares, y éstos cuando hubieren cometido un delito que podía cometerse tan sólo por un militar, vale decir, el delito de desertión, el de venta de las prendas del uniforme, o un acto que implicase un deshonor militar por falta de valor; pero cuando se trataba de delitos que lo mismo podían ser cometidos por militares que por civiles, entonces ya no eran los tribunales militares los que debían conocer de los mismos, sino los tribunales ordinarios de la Nación.

Sr. Güiraldes. — Doctrina que rebate Magnasco.

Sr. Pinto (h.). — En seguida iré a su argumentación.

En esta materia también nos acompañan los tratadistas del derecho público, como Dicey, por ejemplo, que hace un estudio del alcance de la jurisdicción militar y en su *Introducción al Estudio del Derecho Constitucional*, establece de modo categórico que únicamente son de jurisdicción de los tribunales militares los delitos que afecten al ejército como institución militar. Pero en este debate han surgido doctrinas novedosas: se ha afirmado que la jurisdicción surge de la ley y que ésta se puede extenderla caprichosamente, de tal suerte que la jurisdicción limitada del Código Militar podría ampliarse de acuerdo con lo que la ley establezca. Esto lo ha dicho con estas palabras el señor ministro del Interior: «Entre las observaciones que se han hecho al proyecto, figura la que surge de la correlación de los artículos 1º, 8º y 16 de la ley, que crea, según el orador impugnante, una situación verdaderamente singular, puesto que si la gendarmería no forma parte integrante del ejército, y si sus componentes no tienen estado militar, no se ve cómo

pueden quedar sometidos al Código de Justicia Militar en su régimen disciplinario. Desde luego, señor presidente, conviene hacer notar que cuando el proyecto somete a la gendarmería a la jurisdicción militar es bajo los aspectos de su organización interna y régimen disciplinario, pero que por las responsabilidades que surjan de sus relaciones con el público, para sus componentes será competente la justicia ordinaria, porque entonces obra y actúa como policía civil.»

Y ahora viene esta declaración: «Las disposiciones del Código de Justicia Militar, como las contenidas en los demás códigos, no tienen la intangibilidad de las cláusulas constitucionales. Son creaciones y derivaciones de la ley que pueden modificarse, ampliarse o limitarse por imperio de otra ley.»

Me permito, con todo respeto por la versación del señor ministro del Interior, llamar la atención de la Honorable Cámara sobre que es evidente que la jurisdicción surge de la ley, pero en virtud de los preceptos establecidos por la Constitución. Nadie podría decir, por ejemplo, que la jurisdicción federal no surge de los preceptos claros y categóricos de la Constitución, nadie podría afirmar, partiendo del artículo 67, inciso 23 de la Constitución, que puede atribuirse al Código de Justicia Militar la elasticidad más amplia y atribuírsele el conocimiento de delitos cometidos por particulares substrayéndolos al imperio de la ley común, porque esto introduciría el caos, importaría echar por tierra nuestra estructura jurídica y olvidar las nociones fundamentales, que son la garantía y el patrimonio civil de los argentinos.

No deseo extender innecesariamente este debate. Los artículos 117 y 118 del Código de Justicia Militar establecen categóricamente a quiénes alcanza la jurisdicción del código y cuáles son los delitos de carácter militar. En ninguno de ellos podría fincar ni arraigar esta doctrina para extenderla caprichosamente a la gendarmería nacional, que se ha dicho reiteradamente que no es un cuerpo de ejército, ni mucho menos extenderla a los particulares en sus relaciones con la gendarmería nacional.

Yo pregunto a los señores diputados, a los hombres de derecho: ¿qué situación crearíamos en los territorios nacionales con el imperio de esta gendarmería nacional armada con el rayo fulminatorio de la ley militar? ¿Qué juez civil, qué potestad civil se pondría frente a la organización militar de la gendarmería?

¿Qué garantía habría para los particulares frente a los avances de un cuerpo de gendarmería, con funciones policiales al que se lo arma del resorte y de la eficiencia de las leyes militares? Porque no es sólo el régimen disciplinario: detrás de él aparecen las relaciones de la gendarmería con los particulares, cuya extensión no sería comprensible, que no tendría alcance de ninguna naturaleza, si no fuera el deseo de crear un cuerpo de excepción sometido al régimen específico de la ley militar, por encima del derecho común genérico de los habitantes del territorio de la Nación.

Sr. Solá. — En su régimen interno sí, pero no en sus relaciones con el público.

Sr. Pinto (h.). — Yo deseo la aclaración y soy un hombre susceptible de reconocerla; y espero que se haga constar debidamente la aclaración por la cual sobremos cuál es el contenido de ese extraño agregado al artículo 8º, que alarmaría al mismo señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solá. — No me alarma.

Sr. Arbeletche. — La aplicación del Código de Justicia Militar se refiere al régimen interno. Pero aun en el caso de que resultare aplicable cuando interviene un civil, hay que recordar que el propio Código de Justicia Militar establece cuál es la jurisdicción que corresponde en los hechos en que intervienen civiles y militares.

Por otra parte, el artículo 128 del Código de Justicia Militar establece que los oficiales del ejército, aun cuando no estén dentro de zonas de jurisdicción militar, ni en actos de servicio, pero que cometan delitos penados por las leyes militares, deben ser juzgados de acuerdo a ese código; y hay muchas disposiciones del mismo, cuya aplicación corresponde a los civiles en casos que se especifican.

Por supuesto, nosotros entendemos que la severidad no corresponde en manera alguna en la ley destinada a aplicarse a los habitantes de los territorios; pero no hay inconveniente en acceder a que ella se establezca para mantener la disciplina interna de los gendarmes y militares.

Sr. Pinto (h.). — A los efectos de la aplicación de la ley, son ilustrativas las observaciones de esta impugnación que provocan estas aclaraciones del señor diputado por la Capital. Por otra parte, mi impugnación, que no se refiere sólo a las relaciones con los particulares, no lleva en sí propósitos de crítica sistemática, sino que quiere salvar escrúpulos doctrinarios; como hombre de derecho, como profesor de una

universidad argentina y, podrá decirse, ante todo como diputado de la Nación, he debido hacer estas observaciones y creo haberlas formulado con la altura que corresponde a un debate de esta naturaleza. Y debo decir en mi apoyo, que la jurisprudencia de la Suprema Corte me acompaña en la interpretación que hago del alcance de las leyes militares, que son de excepción y totalmente limitadas en su esfera de aplicación; y es ése el punto de vista del propio doctor Magnasco en la nota extensa e ilustrativa que el señor diputado por Buenos Aires encontrará en el tomo I de *Jurisprudencia Argentina*, página 824, que ratifica el punto de vista sostenido desde esta banca diciéndolo así:

«Nos parece que el orden de la jurisdicción y, por consiguiente, de la competencia, debe ser arreglado a otro principio si queremos que la regla resulte comprensiva de los casos generales; y así pensamos —y me permito solicitar la atención de la Cámara— que un delito será militar en tanto afecte principalmente al ejército, esté o no previsto por la legislación común.»

Y si este cuerpo no es un cuerpo de ejército, no hay argumentación, ni hermenéutica que pueda autorizar a sostener que las leyes militares puedan aplicarse a la gendarmería.

Termino, señor presidente, pidiendo perdón a la Honorable Cámara por haber abusado de su atención, con dos palabras más para hacer esta apelación.

No nos apartemos de nuestro régimen legal. Mantengamos los principios fundamentales de nuestra organización civil. No llevemos la confusión de las leyes de excepción a que primen sobre nuestras leyes de orden común. Y recordemos que hace muchos años, una voz que nos habla del fondo de la historia y que debe ser escuchada por todos los señores diputados, la de Bartolomé Mitre, en el famoso debate de la ley marcial, con motivo de la discusión del proyecto de intervención en San Juan en 1869, decía estas palabras que cierran mi discurso, producido con la natural imperfección de esta un tanto precipitada improvisación: «Las leyes militares sólo rigen a los militares. Aplicadas al castigo de delitos comunes o de individuos que no corresponden a su jurisdicción es lo que se llama la aplicación de la ley marcial, aunque ésta no se proclame abiertamente, y lo que constituye el asesinato es hacerlo, y hacerlo en tiempo de paz». Eduardo Cooke, el oráculo de la jurisprudencia inglesa, lo ha dicho hace doscientos años: «Si un lugarteniente u otro munido de comisión o autoridad militar ahorca

o de otra manera ejecuta en tiempo de paz a un hombre so color de ley marcial, esto es un asesinato.»

No llevemos, pues, a nuestras leyes esta perturbación. Mantengamos nuestros principios fundamentales y la unidad de nuestro régimen jurídico, como la mejor salvaguardia de nuestra civilización. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

En las disertaciones que hemos escuchado se ha involucrado, entre otras cuestiones, la relativa a la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar. Antes de entrar a lo que ha de ser el tema central de mis palabras, debo formular algunas consideraciones breves sobre esta cuestión ajena al debate, aunque, evidentemente, ilustrativas.

Si el Código de Justicia Militar fuera inconstitucional, nuestra función como legisladores no es declarar su inconstitucionalidad, sino utilizar los recursos inherentes a nuestra función, para obtener su derogación. Debería llegarse a la derogación del Código Militar y no pretender enmendarle la plana a la Corte Suprema de Justicia, que con una jurisprudencia reiterada, ha sostenido la constitucionalidad del Código de Justicia Militar. Se ha recordado hace una instante, el caso del coronel Espina, inserto en el tomo LIV, página 584, de los fallos de la Corte. Voy a leer uno de los párrafos en que se funda esa sentencia porque ha de servirme para mi argumentación una vez que entre a tratar de lleno el artículo 7º del proyecto en discusión.

Dice la Corte, entre otras consideraciones: «La jurisdicción, pues, de los consejos de guerra o de los tribunales militares en todos los delitos que importen una sublevación de tropas o de individuos del ejército no ha sido establecida por una razón puramente personal derivada del carácter militar del delincuente, sino por razón de la ley que resulta infringida *por la necesidad suprema del orden y de la disciplina*, cuya guarda inmediata está confiada en todas las legislaciones del mundo a las autoridades militares como el medio más eficaz de obtener esos fines primordiales».

El doctor González Calderón, cuya autoridad se ha invocado reiteradamente en las sesiones precedentes, hace estas manifestaciones una vez transcritas las partes pertinentes del fallo: «Me he permitido hacer esta larga transcripción del fallo de la Corte porque él contiene la verdadera doctrina constitucional y porque ha establecido la jurisprudencia definitiva».

Véase cómo la Corte no se encuentra sola en

su doctrina, sino que es acompañada por la autoridad del doctor González Calderón.

Posteriormente, en el año 1917, la Corte debe intervenir en el caso Rodolfo Barrueco Mansilla en el proceso que se le siguió por hurto. En esa oportunidad, no obstante tratarse de un delito de hurto, la Corte sostuvo que era de aplicación el Código de Justicia Militar.

Sr. Pizarro. — ¿Los efectos hurtados eran militares?

Sr. Fassi. — Fueron efectos militares.

Sr. Pizarro. — Por eso la jurisprudencia de la Corte.

Sr. Fassi. — Pero el hurto es un delito penado también por el derecho común.

En esa oportunidad dijo el procurador general de la Corte: «Las leyes de orden militar se fundan en la necesidad de colocar al ejército y a la armada en una situación diferente a las demás partes del mecanismo gubernamental, ya por su composición, ya por las reglas que deben gobernarlo, *de modo de contenerlo ante la sociedad desarmada*, dándole, al mismo tiempo, la unidad y dirección que la ejecución de las órdenes requiere.»

He leído estos fundamentos de la Corte para dejar perfectamente aclarado que la aplicación del Código de Justicia Militar no depende del estado militar, sino de consideraciones de orden superior que la Corte ha puesto en evidencia. Así se justifica que si en los artículos 117 y 118 el Código de Justicia Militar no se enumera a los particulares entre las personas a quienes comprende; éstos, en ciertos supuestos, quedan comprendidos, como sucede entre otros casos en el del inciso 4º del artículo 119.

Lo que se tiene en cuenta —y es lo que ha decidido mi posición en esta circunstancia— es la necesidad que tiene la sociedad desarmada, ante la minoría de sus hijos, a la que ha confiado la fuerza, para que en ningún caso esa fuerza se pueda volver contra el pueblo que ha confiado en ella los elementos bélicos que en tiempo de guerra asegure su seguridad exterior y en tiempo de paz su tranquilidad interna.

Es cierto que los artículos 117 y 118 del Código de Justicia Militar no comprenden a los gendarmes; pero este argumento carece de importancia porque, como lo ha dicho muy bien el señor diputado Cooke, se trata de una ley común que puede ser reformada y ampliada por otra ley común, como esta que estamos tratando. Si aplicáramos esas disposiciones a los gendarmes, no haríamos más que ampliar una ley común. No obsta a este carácter de ley

común la circunstancia de que sea una ley de excepción mientras las particularidades excepcionales que hacen comprender a los militares dentro del Código de Justicia, existan en este caso. Todos los fundamentos enunciados por la Corte pueden hacerse extensivos a estas fuerzas armadas de paz, que no son militares, pero que tiene todo el material bélico y los recursos necesarios para cumplir con eficacia su función en los lejanos territorios donde esencialmente han de cumplir su cometido. Y es bueno destacar aquí que este proyecto, en realidad, no contiene las enormidades que en algún momento se le han querido atribuir. No he de sostener que sus disposiciones no se prestan a controversias, porque nosotros, los que hacemos la vida de tribunales, sabemos que las reglas más simples y más antiguas de los códigos, se discuten todos los días. El país está escuchando el clamor de quienes requieren una corte de casación, cuya creación está justificada por esa circunstancia de que no existe ley, por clara que sea, que no se preste a muchas y muy diversas interpretaciones.

El criterio con que debemos considerar estas disposiciones, no es el de multiplicar las dificultades, sino de encontrar la manera de coordinarlas con las demás normas legales. Si procedemos con tal concepto, veremos que la ley de gendarmería no ofrece serias objeciones y nada se opone a que nosotros la sancionemos sin ningún reparo de conciencia.

En la sesión del 20 de este mes el señor diputado Cooke, anticipó algunos argumentos que no reprodujo en esta sesión, pero sobre los cuales nosotros hemos de insistir para la mejor comprensión del artículo 78.

Decía el señor diputado Cooke que, en realidad, en la ley existía una contradicción, puesto que después de haberles negado el estado militar a los gendarmes los sometía a estas tres circunstancias que son las que constituyen el estado militar: la instrucción militar, la disciplina militar y el sometimiento al Código Militar.

No creo necesario considerar las leyes militares para hacer comprender que el estado militar comprende un conjunto de circunstancias, de derechos y de obligaciones mucho más amplias que las contenidas en esta enunciación que ha hecho el señor diputado Cooke, y que es limitadísima con respecto a las obligaciones y derechos que constituyen el estado militar.

Nuestro proyecto de ley procede con una gran cordura al aplicar a la gendarmería disposiciones que se refieren a los militares, como

lo demuestra este mismo artículo impugnado, que dice lo siguiente: «En lo relativo a la disciplina estará sometido al régimen del ejército y en consecuencia su personal se encontrará comprendido en lo prescripto para los militares en el Código de Justicia Militar».

¿Acaso vamos a deducir de este texto que se aplicarán a los gendarmes todas las disposiciones y todas las penalidades comprendidas en el Código de Justicia Militar? Creo que sería una interpretación demasiado amplia y que no es posible aceptar frente a un régimen que, preciso es confesarlo, aunque fundado en una ley común, es de excepción.

El Código de Justicia Militar se divide, como todos los señores diputados saben, en varios libros. Tiene un libro II, que se titula *Infracciones militares en particular y sus faltas*, y un libro III que se refiere a infracciones de la ley penal general o de leyes especiales. En el libro II, título I, se refiere a los delitos y faltas concernientes a la disciplina. Como nuestro artículo 7º, en discusión, se refiere exclusivamente a la disciplina, entiendo que, del Código de Justicia Militar, ha de aplicarse a los gendarmes las disposiciones sobre delitos y faltas que están comprendidas en este título I, y cuando más las del título II, que se refieren a delitos y faltas que afectan al servicio; pero nunca se podrá aplicar a la gendarmería las disposiciones mucho más graves comprendidas en el libro III, porque ellas no tienen que hacer con la disciplina; y sabemos que de acuerdo al artículo 7º, sólo se aplicarán las disposiciones del ejército en cuanto se refieren a la disciplina. Es decir que el grave peligro que quieren encontrar los señores diputados, por lo menos se hallaría muy circunscripto a faltas y penas que evidentemente son muy graves en quienes detentan la fuerza, como una lógica consecuencia de la situación en que los colocamos. Se refieren al caso de motín, sublevación, rebelión, desobediencia, insubordinación, insultos a centinelas y decoro militar. ¡Y cómo no vamos a desear, que se aplique al caso de motín o sublevación de los gendarmes, penas severas que pueden ser un dique de contención para que ellos procedan dentro de la órbita policial que nosotros les hemos fijado genérica y fundamentalmente! No creo que al respecto puedan existir mayores discrepancias.

Claro está que en la mayor parte de nosotros hay una cierta aprensión, dado que un número mayor de ciudadanos argentinos estará sometido a un código que establece como pena máxima la de muerte. Claro está que los que consideramos que esta pena es bárbara y anacró-

nica, tendremos algunos reparos; pero es reformando el Código de Justicia Militar como podremos dar satisfacción a esos reparos y no planteando cuestiones que se vinculan a ese código ahora que estamos tratando la ley de gendarmería.

Se decía, señor presidente, en qué situación se van a encontrar los particulares y la justicia ordinaria frente a la gendarmería sometida al Código Militar. Pero es preciso no equivocarse, señor presidente. El sometimiento de la gendarmería a la justicia militar no es un atentado contra los particulares. Será, cuando más, una garantía para los particulares, lo que es una cuestión muy diversa.

Se ha sostenido que el artículo 8º se presta también a torcidas interpretaciones. De acuerdo al artículo 8º se establece como una justa y lógica previsión, que los delitos y faltas cometidos por los particulares contra el personal de la gendarmería en ejercicio de sus funciones, se considerarán realizados contra la policía. Parece una redundancia. Lo natural, en ausencia de estas disposiciones, sería que se considerara un delito contra la policía; pero como podría existir alguna duda en cuanto los delitos cometidos por los particulares contra las personas del ejército, en el desempeño de sus funciones, son involucrados dentro de la ley militar, podría interpretarse que, como la función de policía entra en el ejercicio de las funciones de la gendarmería, los delitos de los particulares contra ella quedarán involucrados en el Código de Justicia Militar. Se trata, pues, de una disposición que también tiende a amparar a los particulares. Y si hay una excepción en la cláusula final, esa cláusula nos remite al Código Militar. Quiere decir que tenemos que ir al Código Militar para saber en qué supuesto rige esta disposición del artículo 8º. Lo encontramos en el artículo 119, inciso 4º del Código Militar: «Los particulares o personas extrañas al ejército que en la zona de las operaciones activas cometan cualquiera de los delitos previstos en el tratado 3º de este código o cualquier acto que los bandos de los comandantes en jefe prohiban o castiguen en tiempo de guerra, quedan sometidos a la jurisdicción militar». Se trata del tiempo de guerra, es decir, de circunstancias particulares en que todos los derechos y garantías constitucionales quedan sacrificados, en cuanto sea necesario, para la causa sagrada de la defensa nacional.

Esto me recuerda que en el debate se habló de la ley marcial como si algo tuviera que ver con la aplicación del Código Militar. Son cosas

distintas. La ley marcial es la ley tremenda e inevitable de la guerra, es la ley que hace ceder todas las voces ante la de la patria en peligro, que es la que tiene que oírse más fuerte y llegar al corazón de todos los argentinos.

Sr. Pinto (h.). — Si me permite una interrupción hecha con el mayor respeto y la simpatía que sabe el señor diputado que profeso...

Sr. Fassi. — Es recíproca.

Sr. Pinto (h.). — Tengo a la mano el tomo II del *Derecho Constitucional Argentino*, del doctor González Calderón, que creo ha citado el señor diputado. Dice: «La ley marcial es la aplicación y uso de la ley militar en el lugar o territorio ocupado por las fuerzas armadas de la Nación, según la discreción del jefe de éstas y las necesidades de la guerra conforme al derecho...

Sr. Fassi. — Pero no es la aplicación del Código de Justicia Militar.

Sr. Pinto (h.). — ...y por lo tanto el sometimiento de todos los habitantes de la región ocupada a los tribunales militares con exclusión de los tribunales civiles». Esta ley va a excluirlos de la jurisdicción de los tribunales civiles para atribuirlos a la jurisdicción militar; y en ese aspecto es que yo hablé de la ley marcial.

Sr. Fassi. — La ley marcial tiene una alcance mayor que la aplicación del Código de Justicia Militar.

Sr. Anastasi. — Es la ley marcial en tiempo de paz descubierta por el gobierno defacto.

Sr. Fassi. — Quiere decir que ha quedado explicada la última parte del artículo 8º que suscitara preocupaciones en algunos señores diputados. Y con la aclaración formulada, que entiendo hará suya la comisión, es decir, que sería una de las fuentes de interpretación de la ley, quedarán disipadas las dudas surgidas en algunos espíritus.

La aplicación del Código de Justicia Militar en el caso del artículo 8º, no es una invención de esta ley; es simplemente una aplicación de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 119 del Código de Justicia Militar y entiendo que es aplicable exclusivamente a los casos de guerra. Con este sentido y estas limitaciones, entiendo que no puede haber ningún reparo en que se vote el artículo tal como ha sido proyectado.

Creo, para terminar, que esta ley no es el producto de una improvisación. Ella fué, con pequeñas diferencias, redactada por el eminente constitucionalista doctor Matienzo. Este proyecto ha merecido el auspicio de gobiernos que pertenecían a las más diversas tendencias y nosotros no podemos creer en que hayan incurrido en error quienes nos han antecedido

en su estudio. La ley no ganará en perfección con estas correcciones que se hacen en el recinto, a pesar de la evidente preparación de los señores diputados que la han impugnado, los cuales pueden muy bien no haber tenido en cuenta el conjunto de sus disposiciones, creando discordancias que en vez de beneficiar la economía de la ley, la van a perjudicar.

Por estas razones y por las que ya he expresado anteriormente, he de votar los artículos 7º y 8º del despacho tal como han sido redactados por la mayoría de la comisión.

Nada más. (*¡Muy bien!*)

Sr. Anastasi. — Pido la palabra para una aclaración.

Me parece muy interesante la exposición que acaba de hacer el señor diputado respecto de la interpretación de estos dos artículos y si esa interpretación prevaleciera en realidad, desaparecerían muchos de nuestros temores.

Yo he oído bien, creo haber entendido que el señor diputado ha limitado, por ejemplo, el alcance del segundo apartado del artículo 7º al mero régimen disciplinario de la gendarmería y el del último apartado del artículo 8º para los casos de guerra.

Sr. Fassi. — Así es, señor diputado.

Sr. Anastasi. — Pero como la Honorable Cámara lo sabe muy bien, las opiniones de un diputado, por respetables que ellas sean, no pesan en la interpretación de una ley.

Sr. Fassi. — Por eso es que yo me he dirigido tácitamente a la comisión, manifestándole si cree...

Sr. Anastasi. — A eso voy, señor diputado.

Pero en vez de dirigirme yo en esa forma, lo hago expresamente a la comisión y también al señor ministro de Guerra, porque si queda asentada esta interpretación, habremos ahorrado una cantidad de conflictos en los territorios nacionales.

Por eso yo invito al señor miembro informante de la comisión y al señor ministro de Guerra a que nos manifiesten si la interpretación de ellos es la que ha expresado el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Nuestro sector votará en contra de este artículo 7º, por el que se somete al personal de la gendarmería al régimen de disciplina establecido para el ejército, régimen que ya resulta anticuado también para este último y que contiene resabios de torturas reñidas con el progreso social y democrático de la Nación argentina.

Esta disposición, confusamente redactada como otras muchas del despacho, sugiere dudas,

como lo evidencian los discursos de los diputados preopinantes, sobre su verdadero alcance jurídico, tanto como para justificar las interpretaciones más contradictorias.

Yo no sé, no obstante la pregunta que ha formulado el señor diputado Anastasi, si la Comisión de Guerra y Marina, o su miembro informante, se consideran o no habilitados para evacuar de inmediato una interpretación auténtica de este artículo. Supongo que no, porque como se verá al avanzar en la discusión, ya se han adelantado por algunos señores diputados opiniones que están en abierta contradicción con lo que dice en forma clara, inequívoca, el texto del proyecto.

Hemos visto cómo el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, que ha impugnado también este artículo con motivo de considerarse el 6º, ha llegado a conclusiones, evidenciando a qué metas distintas conduce su estudio objetivo, que no coinciden con las del diputado que habla.

Se ha supuesto, con la rectificación posterior del señor diputado doctor Fassi, que esta disposición puede referirse no sólo al régimen de penas para las faltas contra el orden disciplinario, sino también a la represión de los delitos que pueda cometer el personal de la gendarmería.

Es tan poco claro el artículo, no obstante su aparente buena redacción, que permite presumir que también legisla sobre delitos y hasta que somete su juzgamiento a tribunales militares; situación, esta última, que no podríamos aceptar —y en esto tenía razón en su impugnación medular el señor diputado doctor Pinto—, ya que no se concibe racionalmente cómo un tribunal militar pueda juzgar delitos de personas que carecen de estado militar, que por añadidura deben ejercer sus funciones en lugares donde nunca, en tiempo de paz, podrán tener jurisdicción exclusiva las autoridades militares; jurisdicción que no se la da ninguna ley, que no surge de artículo alguno de este despacho y que tampoco podría crearla un simple decreto del Poder Ejecutivo.

Ya se sabe que no bastaría para justificar un decreto de esa naturaleza, la cláusula constitucional que asigna al primer magistrado la función de comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y de tierra de la Nación. La sanción de reglamentos y ordenanzas para el gobierno de los ejércitos es facultad privativa del Congreso nacional, y es en virtud de ella que éste ha sancionado el Código de Justicia Militar.

Ya definió las facultades de uno y otro poder

el norteamericano Cushing, al pronunciarse contra la validez legal de un reglamento dictado en 1853, para la armada, por el presidente de Estados Unidos, hasta tanto el Congreso aprobase la ley respectiva.

Creo que este artículo no se refiere, en realidad, a delitos, sean cometidos entre el mismo personal de la gendarmería, o dañando a terceros, o afectando bienes de estos últimos o del Estado, sino simplemente al régimen de disciplina interna, a las faltas que afecten a esa disciplina y, si se quiere, también, a las penas que deberán aplicarse para esas faltas, aunque en este último supuesto no indica expresamente la autoridad que tendrá a su cargo la aplicación de las penas, ya que no podrían ser, a mi juicio, los tribunales militares, que sólo juzgan faltas de personas en estado militar.

No quedaría otro camino que canalizar la represión de las faltas hacia la justicia común, excepto, si cabe la excepción, para la aplicación de algunas penas que el Código Militar y el reglamento de disciplina atribuyen al presidente de la República, como en los casos de recargo de servicio, de confinamiento, de destitución o de suspensión de empleo.

En la hipótesis, que es la más estrictamente jurídica, de aceptarse la jurisdicción de los jueces comunes, este artículo quedaría reducido a la autorización para aplicar el reglamento de disciplina, de constitucionalidad y legalidad muy discutibles, en razón de no emanar de una sanción del Congreso. Y aun así, no sabemos cómo los jueces comunes podrían aplicar algunas de las penas, en realidad torturas, que impone el aludido reglamento, entre otras, la barra, el plantón, las faginas, etcétera, a mi modo de ver repugnantes al principio que consagra el artículo 18 de la Constitución, que afirma el objetivo de seguridad y no de castigo de los reos mientras dure su detención.

Niego, pues, que con este artículo se pueda someter al personal de la gendarmería al régimen de delitos y penas respectivas que establece el Código de Justicia Militar. Los delitos de ese personal no podrían ser otros que los legislados por el derecho común y juzgados también por jueces comunes.

Reducida, entonces, la disposición al régimen de las faltas, con la salvedad respecto a las autoridades encargadas de aplicar las penas, no se justifica su subsistencia en el texto de la ley.

En los países democráticos se acentúa el principio de la supresión, por lo menos en tiempos de paz, de los delitos y faltas militares, juzgados exclusivamente por militares y correlativamente el de asimilar los delitos y faltas

de militares a los que establece la ley común; concepto que incluye, desde luego, la supresión de los jueces militares para el juzgamiento y represión de esos hechos.

En algunos países los reglamentos o códigos de justicia o de disciplina militares tienen vigencia temporaria. En Inglaterra se sancionan anualmente, y su prórroga o su nueva vigencia, con o sin modificaciones, depende en exclusivo de la voluntad del Parlamento.

Sr. Fassi. — ¿Si me permite el señor diputado?

Si nosotros adoptáramos ese mismo sistema, no nos alcanzaría todo el período parlamentario para sancionarlas.

Sr. Ruggieri. — No pretendo semejante cosa.

En otros países en que no rige la vigencia temporaria, como en el caso de Alemania, país de orientación militarista, se ha llegado, después de la Gran Guerra, a la abolición de la competencia de los tribunales militares en tiempo de paz y se ha extendido para los militares la competencia de los tribunales comunes y la aplicación del procedimiento penal que rige para todos los ciudadanos. Para estos casos, la ley alemana del 17 de agosto de 1920, no introduce otra variante que la de atribuir facultades de acusador al superior disciplinario de los prevenidos. Se concede la libertad de defensa. Y hasta la deserción, que es un delito típicamente militar, se somete al juicio de los tribunales comunes, de acuerdo con las disposiciones del procedimiento penal.

Aquí, en cambio, queremos aplicar los aspectos menos indiscutidos del régimen militar a una institución esencialmente civil, como es esta gendarmería, que va a realizar un servicio policial; modalidad civil, señores diputados, que no puede desconocerse pese a los servicios de carácter militar que sólo eventualmente, como en el caso de guerra, se le puede encomendar.

Por otra parte, no puede merecer nuestra simpatía un régimen que admite castigos como la barra, el plantón, la fajina, etcétera, que — como he dicho — están reñidos con el concepto constitucional.

Como se sabe, la barra consiste, según el reglamento de disciplina militar, en sujetar de los pies por medio de anillos de hierro fijados en una barra firme. Es un castigo que se aplica substrayéndolo a la vista de los demás. En la barra no se permite hablar, ni fumar. La barra no podrá imponerse —dice el artículo respectivo del reglamento— por más de veinticuatro horas consecutivas, salvo los casos en que se aplicase por razones de seguridad. Esto

significa decir que, para el reglamento de disciplina, veinticuatro horas de barra consecutivas constituyen una pena normal, la que puede extenderse en casos especiales a un tiempo todavía mayor.

Sr. Schoo Lastra. — Hace más de treinta años que no se aplica.

Sr. Ruggieri. — Yo me pregunto si el Congreso argentino, a esta altura de nuestra civilización, puede reincidir en la sanción de semejantes penas para gendarmes que deberán estar en permanente contacto, en su función de policía, con la población civil de nuestras gobernaciones.

En otro orden de ideas, el artículo 7º introduce una nueva contradicción con el concepto general del despacho. Es el primero en que se perfila con nitidez la complicada y doble jurisdicción, militar y civil, y con carácter permanente, para la gendarmería.

Este cuerpo de gendarmes debe depender del Ministerio del Interior, según el artículo 4º, salvo los casos en que, de acuerdo con el artículo 5º, y por disposición del Poder Ejecutivo, pueda ponerse bajo la dependencia total o parcial del Ministerio de Guerra: estado de sitio, exigencias de la defensa nacional, movilización del ejército, etcétera.

El artículo 61 establece que el Ministerio de Guerra organizará la gendarmería pero la pondrá a disposición del Ministerio del Interior antes de los tres años de la vigencia de la ley. Quiere decir que el gobierno del Ministerio de Guerra sobre la gendarmería sólo será temporal y que a los tres años de su organización pasará a depender del Ministerio del Interior.

Pero en este artículo 7º se da carácter permanente a la relación de dependencia de la gendarmería, en cuanto se refiere a disciplina, con el Ministerio de Guerra.

No creo que pueda ser práctica, eficiente y duradera esta doble jurisdicción sobre una cosa que debería someterse a un solo ministerio, hasta para evitar conflictos, no ya entre los ministros, que no serán los menos sensibles para la conservación de la paz en el gabinete, sino entre el mismo personal, especialmente de los afectados por disposiciones que puedan parecer no ajustadas a la competencia de una u otra autoridad.

Por todas estas razones, que sintetizo en forma de enunciados, nuestro sector votará en contra del artículo, con la salvedad de que al mismo, en su segunda parte, no le atribuye otro alcance que el de legislar sobre el régimen de la disciplina interna y de las faltas a la mis-

ma, excluyendo los delitos; y que aun en ese muy limitado concepto no autoriza la habilitación de los tribunales militares para el juzgamiento de las faltas que pueda cometer el personal de tropa o de clases de la gendarmería.

Porque es deber del Congreso aprobar una ley clara, una ley previsoras que no estimule conflictos ni favorezca interpretaciones contradictorias, decimos a la Honorable Cámara que procederá con discreción, que obrará con acierto, no votando esta disposición del despacho, por lo menos en su segunda parte, ya que contra la primera no oponemos ninguna objeción fundamental aunque tampoco la consideramos indispensable.

Nada más.

Sr. Ministro de Guerra. -- Pido la palabra.

Antes de entrar a considerar el artículo 7º que está en discusión, quiero aclarar que desde el año 1914, la barra y el plantón están suprimidos como castigo.

El artículo 7º establece los medios con los cuales se alcanza la militarización de la gendarmería. Se cree indispensable para esta finalidad el sometimiento a las leyes y reglamentos militares, porque mediante la instrucción y disciplina que se observa en el ejército, se asegura hasta la conducta del hombre aislado. Esta es la razón por la cual el mismo artículo establece su dependencia del Ministerio de Guerra en todo lo relacionado con la instrucción y disciplina. Pero este artículo asume capital importancia ante la aparente contradicción con el artículo 16 del proyecto y es por esta razón que me voy a permitir analizar este último en su relación con aquél, para su mejor interpretación.

La cuestión fundamental del debate, dentro de las alegaciones formuladas por los impugnantes del proyecto, está expresada por el señor diputado Solana, cuando se pregunta: ¿Puede un ciudadano ser sometido a la justicia de los tribunales militares no teniendo estado militar? Y yo le contesto que sí, porque, si esta ley se promulga, así lo establece. Es función del Poder Legislativo dictar leyes; él, crea los jueces y les da atribuciones, somete a los ciudadanos a las leyes que crea convenientes.

Y en este sentido, ¿qué inconveniente habrá en someter al personal de la gendarmería nacional que se piensa crear al régimen del Código de Justicia Militar o al de cualquier otro código más o menos severo que se dicte?

Pero es el caso que en los países en donde se ha creado la gendarmería se la somete al Código de Justicia Militar respectivo, por ser

éste el medio, tal vez, más conveniente para asegurar la eficacia de este servicio especial de armas —y vuelvo a insistir que se trata de un servicio especial de armas—, y, ¿por qué hemos de cambiar nosotros este régimen, renunciando a la experiencia que nos dan esos países?

Vuelvo a repetir lo que ya dije en la primera exposición: cuando se trata de legislar, la legislación comparada es elemento de juicio de enorme importancia y no debe prescindirse de su larga experiencia.

El gendarme, vale decir, el ciudadano que dispone libremente ingresar a una institución como la que se va a crear, cuya ley orgánica dispone que las personas que formen parte de ella están sometidas a la justicia militar, el día que sea indagado por un juez de instrucción militar, ¿puede afirmarse que ha sido sacado de sus jueces naturales?

¿Dónde está la inconstitucionalidad?

Pero es el caso de que en realidad, el personal de la gendarmería tendrá estado militar aunque no el estado militar que podríamos llamarlo integral y que define el artículo 14 de la ley número 9.675, sino otro estado militar más limitado y de carácter temporal. Como lo es el del ciudadano llamado al servicio o el del oficial de reserva incorporado por convocatoria general o por llamado personal que tiene estado militar durante el tiempo que dure su servicio.

Es por ello que he calificado de aparente la contradicción entre los artículo 7º y 16. En efecto: para apreciar con justa medida el valor de la objeción de que voy a ocuparme, conveniente analizar el concepto de «estado militar».

El artículo 14 de la ley número 9.675, lo define: «Estado militar es el conjunto de obligaciones y derechos que las leyes y reglamentos establecen para cada militar en su grado, situación y destino.»

Los artículos 16 y 17, especifican las obligaciones y derechos aludidos.

Cuando un militar pasa a situación de retiro pierde la facultad de mando pero no su «estado militar», el que sufre sólo una disminución.

Por efecto del retiro, el militar deja de estar sometido a los reglamentos militares (artículo 38, inciso 5º, ley número 9.675) lo que concuerda con el artículo 118 del Código de Justicia Militar. Pero hay dos excepciones (artículo 38, inciso 5º, ley número 9.675).

a) Cuando el retirado vista uniforme «ten-

drá las mismas obligaciones y deberes que los oficiales en actividad;

- b) Mantienen su sujeción a los reglamentos y leyes de justicia militar, cuando desempeña cualquier puesto dependiente del Ministerio de Guerra.

Con lo que la ley número 9.675, ha modificado el alcance del artículo 118 del Código de Justicia Militar, haciendo extensiva la jurisdicción militar a los retirados que se encuentran desempeñando puestos dependientes del Ministerio de Guerra.

Este, es, pues, el «estado militar», que define el artículo 14 de la ley número 9.675 y que he convenido en llamarle *integral*.

Un oficial de reserva, no proveniente de las filas del ejército, mientras no esté incorporado a ellas por convocatoria general o por llamado personal, *no tiene estado militar*. Sin embargo, la ley ha dispuesto que cuando se incorpore temporalmente a las filas, lo tenga, ya que el artículo 39 dice: «Mientras dure el servicio temporal o estén movilizadas, quedan sometidos a todas las prescripciones del Código de Justicia Militar; leyes, reglamentos y disposiciones vigentes para los oficiales del ejército permanente.»

Esto es, pues, el «estado militar» limitado o temporal que la ley establece sin darle esa designación que he empleado para su mejor distinción.

El artículo 16 del proyecto niega el estado militar permanente o integral al personal de la gendarmería, pero se lo confiere limitado, por cuanto cita el artículo 7º por el que se somete al mismo a las disposiciones del Código de Justicia Militar. Y para su mejor interpretación, dice en el segundo párrafo del artículo 16: «Sus servicios se considerarán como prestados en servicio temporal.» Lo que ese quiere evitar es que teniendo estado militar temporal, se pueda pasar a un gendarme a una unidad de tropa dándole un estado militar integral.

El artículo 16 del proyecto es concordante, por lo tanto, con el 39 de la ley número 9.675. Cabe preguntarse aquí: ¿por qué razón la ley número 9.675, que ha creado el *estado militar temporal* para el reservista, no puede hacerlo extensivo en esa misma forma limitada, al gendarme?

El legislador bien puede crear un organismo que ha de atender un servicio público nacional, que es servicio armado, disponiendo que en su organización y disciplina internas rijan las disposiciones de la ley penal militar, esto es, que

sus miembros componentes tengan un estado militar limitado y circunscripto a un determinado aspecto de su actividad.

No es otro el alcance que ha de darse al artículo 16 del proyecto.

Con esto creo haber aclarado que la contradicción que algunos señores diputados han encontrado entre los artículos 7º y 16, es solamente aparente.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Por de pronto, he de hacer una observación sobre si las leyes deben o no ser modificadas en el recinto de la Cámara, o si en la Cámara debemos votar automáticamente los proyectos tal como nos vienen en los mensajes del Poder Ejecutivo o en los proyectos de los legisladores y en los despachos de comisión, o si podemos modificarlas aun a riesgo de quebrar la unidad y la armonía de dichas leyes.

Yo creo que si estamos reunidos en el recinto para deliberar y sancionar leyes, es facultad esencial y privativa de la Cámara entrar a considerar si ellas están bien o mal hechas en su fondo y en su forma. De manera que ésta y no otra es la oportunidad de entrar a la reforma del proyecto.

Sr. Fassi. — Si me permite una pequeña interrupción...

No niego el derecho que tiene la Cámara de variar el texto de las leyes; pero cuando se trata de leyes como ésta, que tienen 66 artículos, que son producto de una larga elaboración, que nos ponen en presencia de instituciones que se prestan a múltiples interpretaciones, es muy posible que la modificación del recinto no beneficie a la ley sino que más bien la perjudique. Hablo de una cuestión de conveniencia y no de una cuestión de derecho.

Sr. Pizarro. — La observación que acaba de formular el señor diputado me da doble razón. Cuando llegamos al recinto para tratar una orden del día de la importancia y trascendencia de la presente, no venimos a improvisar, sino que venimos a decir al país con toda sinceridad y honestidad cuál es el régimen legal que debe imperar en la sanción de determinados principios para que ellos se conviertan o no en ley.

Yo entiendo que este proyecto, con sus 66 artículos, contiene una enormidad de errores de carácter constitucional y legal, que nosotros vamos a contribuir a consagrar por imperio de la mayoría, pero no por la voluntad de muchos legisladores que estamos presentes.

Sr. Fassi. — Eso ocurre con la mayor parte de las leyes.

Sr. Pizarro. — Entrando al fondo del problema que suscita este artículo, el señor ministro de Guerra nos ha dicho hace un momento, con toda la autoridad que inviste, que la jurisdicción nace de la ley y de los jueces.

Ahora voy a entrar dentro de la más estricta ortodoxia militar. El Congreso tiene facultad para dictar la ley de organización, el Código de Justicia Militar; pero no tiene facultad, como en materia civil; para crear los tribunales militares, porque ésta —lo saben los señores diputados y el señor ministro— es una facultad emanada de la facultad de comando que corresponde al Poder Ejecutivo. Por eso sus resoluciones no causan instancia.

Entonces yo me pregunto, ¿con qué derecho, con qué atribución, nosotros como legisladores vamos a someter a hombres que no se encuentran sujetos a la voluntad y a la decisión del Poder Ejecutivo, a jueces especiales sacándolos de sus jueces naturales y de la Constitución? Si los tribunales militares —y deseo que el señor ministro me rectifique si estoy en error— fueran una creación legal, admitiría la jurisdicción militar, pero sabe muy bien el señor ministro que los tribunales militares son delegación de la facultad de comando del Poder Ejecutivo, y entonces no podemos renunciar a la jurisdicción civil en esta materia.

Sr. Lazo. — Son legales por delegación.

Sr. Pizarro. — Son legales por imperio de la Constitución.

No podemos ampliar la jurisdicción en casos que no corresponde porque siendo situación de excepción, no puede ser ampliatoria.

Sr. Anastasi. — No ejercen funciones de Poder Judicial. Ejercitan una función ejecutiva.

Sr. Lazo. — Estamos de acuerdo en eso.

Sr. Anastasi. — No podemos sacar a personas de su fuero natural y entregarlas al fuero militar.

Sr. Pizarro. — La observación del señor diputado por Buenos Aires es interesante. La jurisdicción no se crea por renuncia sino por disposición expresa de la ley y de la Constitución. Nosotros podemos admitir el amparo del Código de Justicia Militar para todos aquellos que están prestando servicio militar. Por eso nos ha dicho muy bien el señor ministro de Guerra, que se amplía con respecto a todas aquellas personas que entran nuevamente a prestar servicios, como los reservistas cuando son llamados nuevamente bajo banderas; pero también es conocido de la Cámara otro hecho

actualmente sometido a la decisión de la corte y tribunales militares con respecto a personas que anteriormente se encontraban en situación de retiro, sobre los cuales no correspondía la jurisdicción de los tribunales militares.

Este artículo contiene en esta parte una incongruencia de carácter constitucional y no lo puedo votar sin hacer los reparos que dejo formulados.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Sería interesante oír a la comisión acerca de la interpretación que hace el señor diputado por la Capital y la pregunta que yo formulé. Entendemos que la ley es mala, pero puede mejorarse con la interpretación.

Sr. Lazo. — El alcance que pueda darle un diputado, no modificará el texto expreso de la ley.

Sr. Anastasi. — Sí, señor diputado; pero las expresiones del miembro informante sirven como elemento de interpretación de la ley.

Sr. Susan. — Pido la palabra.

La comisión va a mantener el despacho, pero no puede dejar de interpretar o de aceptar la interpretación que precisamente formulaba el señor diputado Ruggieri, en cuanto al alcance de la última parte de este artículo en la aplicación del Código de Justicia Militar en lo que se refiere a actos de disciplina, porque la comisión entiende que el Código de Justicia Militar puede aplicarse en caso de excepción: caso de guerra, estado de sitio, ley marcial. Esa es la razón por la cual la comisión va a mantener el despacho tal cual está, pero aceptando la modificación a objeto de que sirva de antecedente para la interpretación que posteriormente pudieran hacer los tribunales. Pero la comisión y, sobre todo, alguno de los miembros de nuestro sector, no podemos dejar por altos conceptos formulados un momento antes sobre la aplicación de la pena de muerte. Somos opositores a esta pena y apoyaremos siempre toda tentativa que se haga para abolirla definitivamente de nuestras leyes.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

Sr. Ruggieri. — Nuestro sector va a votar en contra del artículo 7º, pero dejo constancia de que me complacen las palabras del señor diputado por Santa Fe en cuanto traducen, con la autoridad de miembro informante de la comisión, la interpretación que corresponde dar a este artículo.

Sr. Videla Dorna. — Pido la palabra.

Quisiera que el señor miembro informante ratificara los conceptos vertidos hace un momento respecto al pensamiento de que está de

acuerdo con esa interpretación de este artículo: si es por parte de los miembros del sector al cual pertenece el miembro informante o lo ha hecho a nombre de la mayoría de la comisión.

Sr. Susan. — Como miembro informante así lo he interpretado, expresando que entendía que la aplicación del Código de Justicia Militar se refería a los casos de disciplina y de organización interna, y que esta aplicación del Código de Justicia Militar se haría —yo lo interpreto así y la comisión así lo ha incluido en la ley— en los casos de excepción, aquéllos en que realmente entra en vigor el estado militar.

Sr. Videla Dorna. — En lo que se refiere a la mayoría de la comisión, interpretamos sus miembros lo siguiente en dos formas: el régimen militar para todo lo que importa su disciplina interna, y régimen civil en todo lo que se refiere a las relaciones con los particulares, en una palabra, se trata de la interpretación estricta de lo que se deduce de la lectura del artículo.

Dejo aclarada, pues, esa interpretación.

Sr. Susan. — Yo he entendido lo que acabo de expresar, y como estamos alejados los miembros de la comisión, no podemos discutir punto por punto.

Sr. Lazo. — Es una opinión personal y no el criterio de la mayoría.

Sr. Schoo Lastra. — Pido la palabra.

Hablaré brevemente como miembro de la comisión.

He pedido al señor miembro informante me aclarara su concepto en el sentido de que el régimen militar —así me lo ha afirmado— cabe y corresponde en todo lo que se relaciona con la organización y disciplina, y a los casos excepcionales a que aludió el luego.

Sr. Ruggieri. — No incluyendo delitos sino faltas a la disciplina. Esa es la aclaración del señor miembro informante de la comisión, y tengo entendido que el señor diputado por Buenos Aires no ha rectificado.

Sr. Videla Dorna. — No es cuestión de refutar sino de aclarar cuál es la verdadera interpretación de la mayoría de la comisión.

Sr. Ruggieri. — Por eso decía que el señor diputado por Buenos Aires no ha rectificado en esa parte la afirmación del miembro informante de la comisión.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 7º.

—En discusión el artículo 8º.

Sr. Ministro de Guerra. — Pido la palabra.

Desearía aclarar el concepto de este artículo, porque de acuerdo con lo que he oído decir aquí, me parece que hay una interpretación quizá equivocada.

Sr. Ruggieri. — Si el señor ministro acepta previamente oír mi exposición...

Sr. Ministro de Guerra. — No tengo inconveniente.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Proponemos la supresión de este artículo 8º, que es, a mi modo de ver, un modelo de superfluidad.

Al iniciarse la discusión en general no creí que fuera necesario pedir la exclusión del artículo 8º, precisamente porque había advertido su absoluta inocuidad o intrascendencia; pero después de lo que ha pretendido explicar en el recinto, en la sesión del 15 de julio, el señor diputado Videla Dorna, que como miembro de la Comisión de Guerra y Marina se ha esforzado en dar los fundamentos técnicos del despacho, y después de lo que hemos oído, en la sesión de esta tarde, rectificando las opiniones de aquél, a otros señores diputados que son también miembros de la comisión, he comprendido que la conducta más discreta que podía asumir la Honorable Cámara frente a este artículo, era votar su eliminación.

Prescindiendo de las observaciones de orden constitucional que podría oponer para fundar mi punto de vista, a fin de contraerme a observaciones de orden práctico y a considerar interpretaciones que, en parte, han sido refutadas, y con éxito, aunque no se lo propusiera expresamente, por el señor ministro del Interior.

Se trata, señores diputados, de una disposición innecesaria. Establece, en efecto, que los delitos y faltas cometidas por particulares contra el personal de la gendarmería en ejercicio de sus funciones, se considerarán como realizados contra la policía, y luego agrega: «excepto en los casos que corresponda la aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar».

Yo me pregunto, señor presidente, si se puede llegar a una solución distinta sin la existencia de este artículo en el contenido de la ley. Sostengo que no. Los delitos y las faltas de los particulares son todos de derecho común, y están sometidos a la justicia también común, salvo las excepciones establecidas en el Código de Justicia Militar, que, como se sabe, trata de

delitos de particulares cuyo juzgamiento corresponde a los tribunales comunes y de delitos de particulares, cometidos en tiempo de guerra, cuya represión corresponde a los tribunales militares.

Se resiente la seriedad legal del despacho repitiendo en esta disposición lo que ha previsto toda la legislación penal y de excepción sobre la materia. Pero nuestra observación se funda en algo más importante todavía.

Al discutirse en general el despacho, se ha producido un hecho extraordinario, que da caracteres de inusitada gravedad a este artículo 8º, por lo menos si se aceptara en silencio el pensamiento de algunos miembros de la Comisión de Guerra y Marina, y aunque los jueces no están obligados a admitir, como fuente de interpretación de la ley, todo lo que se diga en el curso de su discusión, especialmente por los señores diputados que no son miembros informantes de la comisión que formula el despacho.

La gravedad consiste en esto: que se pretende hacer decir a este artículo precisamente lo contrario de lo que dispone en forma muy clara y precisa. Se ha llegado a atribuirle el excepcional alcance jurídico de someter al régimen del Código de Justicia Militar hechos punibles que, hasta ahora, durante la vigencia del mismo código, están regidos por el derecho común.

Se ha dicho, señor presidente, en la sesión del 15 de julio, por el señor diputado por Buenos Aires, lo siguiente:

«... no puedo pasar por alto el ferviente deseo de dar una explicación que aclare algo más esa nebulosa recogida ayer en cuanto a la interpretación de la ley. El artículo 8º, dice: «Los delitos y faltas cometidos por particulares contra el personal en el ejercicio de sus funciones, se consideran como realizados contra la policía.» Y luego agregó: «Corresponde, en estos casos, la aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar...»; afirmación, esta última, absolutamente equivocada, no exacta.

Observe la Honorable Cámara, que donde dice el artículo que determinados delitos o faltas de particulares se consideran realizados contra la policía, o sea que se trata de hechos regidos por el derecho común y sometidos, por tanto, al juicio de los tribunales comunes, un miembro de la comisión incurrir en el grave error de afirmar que serán juzgados de conformidad con las disposiciones del Código de Justicia Militar.

No se concibe ese error, tan grueso, después de lo que dice la última parte del artículo, que al ratificar el alcance de la primera y legislar sobre los casos de excepción, dice: «Excepto en los casos que corresponda la aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar.»

El error es grave, porque el comentario se refería a los delitos o faltas de particulares, y porque no dejaría de ser error, aunque no de tanta gravedad, de aludirse a hechos cometidos por personal de la gendarmería en perjuicio de los particulares. Aun en este último supuesto, no se trataría de delitos militares, ni sobre ellos podría caer la competencia de los tribunales militares.

El señor ministro del Interior, sin proponérselo, ha aportado la mejor refutación al concepto del señor diputado. En la sesión del 20 de julio, dijo lo siguiente: «Desde luego, conviene hacer notar que cuando el proyecto somete la gendarmería a la jurisdicción militar, es desde los aspectos de su organización interna y régimen disciplinario; pero que por las responsabilidades que surjan de sus relaciones con el público, para sus componentes será competente la justicia ordinaria, porque entonces obra y actúa como policía civil.»

Mas adelante ratifica esa opinión con una cita de Pierre Hugueney, según el cual, «los gendarmes —se refería a los franceses— cumplen un servicio de naturaleza mixta. Son militares, y a este título están sometidos, para todo lo que concierne a la disciplina general, como los demás militares, a la jurisdicción militar. Pero al mismo tiempo son agentes de policía judicial, lo que constituye una función civil, y en este carácter deben, como lo dice el artículo 3º apartado 6º, permanecer bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios por todos los crímenes o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones especiales».

Es interesante saber cuáles son los hechos de excepción a que alude la última parte de este artículo 8º

Sobre este punto se ha incurrido en un nuevo y visible error. Se ha dicho por el señor diputado por Buenos Aires que «en el caso de robo de un capote o si desaparece un equipo completo o un arma, etcétera, se aplican las disposiciones del Código de Justicia Militar». Y todavía se añade, para que la intención no sea equívoca: «Es lo que corresponde.»

La verdad es que ni en tales casos se aplica el Código de Justicia Militar, ni es tampoco lo que corresponde.

No hay otros casos de excepción que los limitadísimos que contiene el tratado III del Código de Justicia Militar, y los hechos que prohíben o castigan los bandos de los comandantes en jefe y siempre que en uno u otro caso los actos delictuosos de los particulares se cometan en tiempo de guerra y en la zona de las operaciones activas.

Quiere decir, pues, que la legislación vigente ha previsto todo, y que este artículo 8º está de más, desde que no la modifica, a menos que salvando el escollo de su texto expreso, se pretenda darle el alcance extraordinario que por simple impericia para la interpretación jurídica se ha referido en la sesión del 15 de julio.

La última parte de esta disposición no tiene sentido alguno, según nuestro modo de ver, si los gendarmes no adquieren estado militar, que sólo podría producirse en los casos del artículo 5º, incisos b) y c), y del artículo 6º, vale decir de guerra; pero aun en este supuesto, la aplicación del Código de Justicia Militar, para los casos de excepción que legisla, se producirá sin necesidad de que lo diga esta disposición del despacho.

Si no bastara lo que dice el texto escueto del artículo, cuya subsistencia en la ley nadie podría explicar con un fundamento serio, sería oportuno, entonces, agregar lo siguiente:

La jurisdicción militar es de excepción. Surge, según interpretación reiterada de la Corte Suprema de la Nación, de lo que dispone el artículo 67, incisos 23 de la Constitución, y aun cuando por muy serias razones, algunas de las cuales se han traído en el curso de este debate, se ha sostenido la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, en cuanto autoriza a juzgar militarmente en tiempo de paz actos del derecho común, aun cometidos por individuos en estado militar.

Fuera de los casos excepcionales de hechos perpetrados por particulares en tiempo de guerra y en las zonas de las operaciones activas, lo que tipifica el delito militar es que quien lo cometa tenga estado militar y se lleve a cabo en lugares de jurisdicción exclusiva de las autoridades militares.

Recuerdo que al discutirse en general el despacho de la comisión, el señor diputado por la Capital, doctor Anastasi, citaba muy oportunamente un fallo de la Corte Suprema de la Nación, según el cual corresponde a la justicia común juzgar el delito cometido por un particular en un lugar que no es de exclusiva jurisdicción de las autoridades militares. Esa sentencia que,

por otra parte, se limita a repetir reglas expresas y claras del Código de Justicia Militar, define como condición inseparable de todo delito calificado por el mismo, que se cometa en lugar donde las autoridades militares ejerzan una jurisdicción exclusiva. Pero la cita de ese fallo no es suficiente para comprender todo el contenido del mismo.

Lo que se ha traído como cita es la leyenda que figura en el índice de una revista jurídica, que no traduce toda la doctrina de la respectiva sentencia.

De la cita del índice parecería desprenderse que cuando un particular en tiempo de paz comete un delito en lugar de exclusiva jurisdicción militar, cae bajo el régimen del código de excepción. Y la verdad es que el fallo de la corte no dice eso, ni podía expresarlo ante las disposiciones del código especial, que limita la jurisdicción de los tribunales militares sobre los particulares en tiempo de guerra, y cuando sus hechos punibles se cometan en la zona de las operaciones bélicas con el enemigo.

Sr. Anastasi. — Por ejemplo, ha habido casos de falso testimonio ante los tribunales militares y se ha entendido que corresponde su conocimiento a la jurisdicción común.

Sr. Ruggieri. — Exacto. Quería aclarar, para que no se interpretara erróneamente la cita que, muy oportunamente, trajo en la sesión del 15 de julio el señor diputado.

Los hechos del particular, fuera de los casos de excepción, y cualquiera sea el lugar en que esos hechos se ejecuten, sólo son delitos del derecho común, juzgados por los tribunales también comunes. Más todavía: aunque se tratara de delitos previstos en el Código de Justicia Militar.

Esa es la regla, señor presidente, concretada en un artículo de dicho cuerpo legal, el 125, citado con frecuencia en los fallos judiciales. Esta disposición, que desvanece hasta la más mínima duda, dice lo siguiente: «Si un delito común ha sido cometido a la vez por militares y por particulares, serán todos justiciables ante los tribunales ordinarios, a menos que el hecho hubiese sido cometido en acto de servicio o en paraje sujeto exclusivamente a la autoridad militar, en cuyo caso, y con las excepciones de esta ley, los militares serán juzgados por los tribunales militares, y los particulares por los ordinarios.» Es tan terminante este artículo que, aun para el juzgamiento de un mismo hecho, se establecen dos jurisdicciones, una militar, para los militares,

y otra, la común, para los que no tienen estado militar.

En síntesis, el artículo 8º se limita a establecer, para los delitos y las faltas de los particulares contra el personal de la gendarmería en ejercicio de sus funciones, la aplicación del derecho común, es decir las reglas legales en vigencia, y, para los casos de excepción que ha previsto el Código de Justicia Militar, para determinados hechos cometidos en tiempo de guerra en las zonas de las operaciones activas, el régimen de represión del mismo código. Y hemos visto que no se aplicaría disposición alguna de este código, salvo el caso del artículo 6º, complementario del 5º, incisos b) y c), que implícitamente dan a los gendarmes, en forma temporaria, el estado militar, y sólo en las circunstancias que tales artículos han previsto.

En otros términos, es innecesaria la inclusión del artículo 8º, como sin fundamento alguno la extensión que se ha pretendido darle, divorciándose de su texto, a mi modo de ver claro e intergiversable.

Por estas razones pedimos a los señores diputados que nos acompañen en la supresión del artículo 8º. Evitaremos en el texto de la ley la repetición inútil de un principio legal vigente y, sobre todo, dudas y equívocos si algún magistrado de la justicia común o algún miembro de los tribunales militares quisiera buscar una interpretación distinta tomando, como fuente de la misma, opiniones que hayan podido expresarse en este debate. (*¡Muy bien!*)

Sr. Videla Dorna. — Señor presidente: quiero hacer brevemente una aclaración de la interpretación que he querido dar al artículo 8º en mi exposición hecha en la sesión del día 15 y a la que se ha referido el señor diputado por la Capital.

El proyecto en discusión, en su artículo 3º, establece que en tiempo de paz las funciones de la gendarmería nacional se ejercen —inciso a)— «en todos los lugares sujetos a jurisdicción federal, con excepción de los sometidos a jurisdicción militar». Y al referirme al caso particular que citó el señor diputado por la Capital, dije «...delito cometido dentro del cuartel o en jurisdicción militar»; es decir, que la existencia de la jurisdicción militar surge de un caso de excepción, como puede ser el que se relaciona con la última parte del artículo 8º.

Sr. Ruggieri. — No, señor diputado, por el solo hecho de cometerse el delito en lugar de jurisdicción militar...

Sr. Videla Dorna. — Dejo así aclarada la verdadera interpretación.

Sr. Ruggieri. — Aceptable si se refiere exclusivamente al caso de guerra.

Sr. Videla Dorna. — Mediando situaciones que atañen al régimen interno, de carácter disciplinario, y también en el caso de guerra, por ejemplo.

Sr. Ruggieri. — En su exposición anterior no se refería precisamente a eso.

Sr. Videla Dorna. — Quiere decir que no había aclarado bien el concepto, posiblemente.

Sr. Ruggieri. — Muy bien.

Sr. Ministro de Guerra. — Pido la palabra. Me voy a referir al caso de excepción del artículo 8º.

El Código de Justicia Militar prevé varios delitos a que hace referencia el artículo 8º en esta parte. Pero el Código de Justicia Militar se limita pura y exclusivamente a fijar las penas, y son los jueces del fuero federal o común, según corresponda, quienes los aplicarán. Los delitos de esa naturaleza deben ser previstos y reprimidos por el Código de Justicia Militar, para el caso de que sean cometidos por particulares contra la gendarmería, porque se trata de un organismo militarmente constituido.

Creo que es necesario analizar bien claramente cuál es la naturaleza de esos delitos y cuál es la razón por la cual deben ser previstos y reprimidos por el Código de Justicia Militar. A ese efecto me referiré a dos ejemplos que para mí son característicos. Uno, es el delito a que hace referencia el artículo 644 del Código de Justicia Militar: «El particular o persona sin carácter militar que ejecute los hechos a que se refieren los dos artículos anteriores, será castigado por el juez o tribunal competente, con prisión en el primer caso y con arresto en el segundo.» Se refiere ese artículo a los actos de violencia de un particular contra un centinela y en este caso el Código de Justicia Militar se limita, como acaba de verse, a fijar las penas, dejando su aplicación a los jueces naturales.

Un acto de la naturaleza del que examino no es un delito que ataque únicamente las normas de convivencia social comunes a todas las personas. Va dirigido con una estructura que tiene leyes propias y exclusivas. A mi modo de ver, no puede ser equiparable el acto de un civil que ataca con armas o sin ellas a un gendarme de policía que está de facción, que el que ataca a un centinela; este último, en virtud de las leyes y reglamentos que lo rigen, tienen la obligación de defender su puesto y hechas tres intimidaciones, hace uso de su arma, sin que los resultados de su acción lo

puedan convertir en un delincuente. En cambio, un gendarme de policía en condiciones análogas, tiene su acción limitada al estrecho marco de la legítima defensa. El primero, defiende la investidura, el segundo, su persona.

Otro caso que resulta también característico, es el que hace referencia el artículo 771 del Código de Justicia Militar: «todo individuo que a sabiendas compre, empeñe u oculte, cualquiera de los objetos a que se refieren los dos artículos precedentes —se refieren a elementos de equipo y armamento— será condenado por el juez o tribunal competente con arresto o prisión hasta tres años.»

Y deseo aclarar que esto no ocurre en tiempo de guerra. Pero es que la naturaleza de este delito ataca a la defensa nacional, o más bien al organismo encargado de su defensa. Es lógico entonces que los delitos de la naturaleza de los expresados, tengan cabida en el Código de Justicia Militar, cuerpo de ley que tiende a la conservación de las fuerzas armadas.

Este es el concepto que hay que darle al caso de excepción a que hace referencia el artículo 8º, el que creo está muy bien colocado, como lo ha demostrado la diversidad de interpretaciones que he oído en el seno de la Honorable Cámara.

Nada más.

Sr. Ruggieri. — ¿Coincide el señor ministro con la opinión que he dado a la Honorable Cámara, en el sentido de que aun en esos casos particulares no corresponde la competencia de los tribunales militares, sino que deben ser sometidos al juzgamiento de los jueces comunes?

Sr. Ministro de Guerra. — Sí, señor; así es.

Sr. Solá. — Pido la palabra.

No pensaba intervenir en este debate y guardaba silencio sobre las cuestiones fundamentales que se han debatido; pero ante una última intervención del señor diputado Pizarro y la que acaba de hacer el señor diputado Ruggieri, me inducen a quebrantar el propósito que tenía y a decir breves palabras.

A través del debate que se ha hecho sobre esta ley de gendarmería, me ha parecido notar que los diputados que han impugnado con más energía, con más violencia, al parecer con la mayor convicción de que estamos frente a una ley deplorable, adoptaban una postura especial para impresionar con sus argumentos. Le daban al artículo que se impugnaba una interpretación evidentemente inconstitucional; y suponiendo que esa interpretación coincidiera con el texto del artículo, hacían magníficas exposiciones, fáciles exposiciones.

Así pasó, por ejemplo, con el debate que se hizo alrededor del artículo 3º. Fué propugnado con gran acopio de discusión, con gran elocuencia, considerándolo como un atentado a las autonomías provinciales. El artículo 3º fué interpretado como autorizando el ejercicio del poder policial de la Nación en las provincias. Planteada la cuestión en este terreno, era evidente que la observación tenía que tomar contornos de verdad, que los fundamentos de orden constitucional que se aducían en su contra reposaban sobre una base indiscutiblemente firme. Pero es que lo inconstitucional no era el texto de la ley, sino la interpretación que se hacía del texto de la ley.

Sr. Ruggieri. — Reconozca que yo no hice hincapié en ninguna objeción de carácter constitucional...

Sr. Ravignani. — Y yo la mantengo en toda su amplitud.

Sr. Ruggieri. — ...aunque comparto esas objeciones.

Sr. Solá. — No deseo hacer una discusión retrospectiva, sino fijar el criterio de mi exposición.

El artículo 3º era perfectamente claro al establecer que esas funciones se realizarían en lugares sujetos a la jurisdicción federal en cualquier parte de la Nación, con excepción de los militares.

Sr. Ravignani. — Ahí está: de la Nación.

Sr. Solá. — En cualquier parte de la Nación que fueran requeridos para auxiliarles en el ejercicio de sus funciones.

Sr. Ravignani. — La Nación son las 14 provincias.

Sr. Solá. — Exactamente, en las 14 provincias.

¿En qué forma este cuerpo podría entrar a ejercer funciones en los territorios? Era necesario considerar su carácter. En primer lugar, es una institución de carácter nacional, un cuerpo que se crea para que dependa del Poder Ejecutivo de la Nación. Tiene una función perfectamente delimitada; es un cuerpo de carácter civil, aunque militarizado, con una función precisa, la función de policía. Es un cuerpo de policía para guardar el orden; de manera, pues, que las únicas intervenciones que pudiera tener en el territorio de las provincias estarían siempre subordinadas a esta cuestión fundamental: que el presidente de la República en ejercicio de sus facultades legales pudiera enviar las fuerzas de la gendarmería para emplearlas en la función específica que se les atribuye de acuerdo con esta ley. No había, por

consiguiente, ningún ataque a las autonomías provinciales porque se limitaba a decir al presidente de la República: tiene a la mano un cuerpo para que en todas las oportunidades en que por la Constitución y las leyes deba usted enviar las fuerzas de la Nación, pueda enviar también a la gendarmería.

Pero se interpretó en el sentido de que invadía las atribuciones de las provincias en lo que se refiere a la organización de sus servicios internos para mantener el orden y, evidentemente, en esta forma el artículo aparece como inconstitucional. Lo único inconstitucional para mí, es la interpretación.

Después hemos visto seguir el mismo procedimiento en la discusión de los artículos 6º, 7º y 8º. El señor diputado Cooke para combatir el pensamiento central de estos artículos, la aplicación del Código de Justicia Militar a los casos concretos que en los propios artículos se determinan, se esforzó en demostrar que el Código de Justicia Militar era una ley inconstitucional, sin duda para llegar a la conclusión de que aumentábamos la esfera de aplicación de una ley inconstitucional.

Sr. Cooke. — Si me permite una pequeña interrupción...

Quiero decirle simplemente que en esa tesis tengo una gran compañía.

Sr. Solá. — Le falta una que es muy importante: la compañía de la Suprema Corte de la Nación, que es la que en definitiva dice la última palabra respecto a la constitucionalidad de las leyes.

Sr. Cooke. — La Corte no se ha pronunciado sobre todos los aspectos del código. Y en este recinto hubo en 1926 un brillante debate en que quedaron en pie, sin rectificación, todos los argumentos sobre inconstitucionalidad del código.

Sr. Solá. — Yo le digo al señor diputado, que se alarmaba tanto con el fuero excepcional conferido a la justicia militar, que ese fuero ha existido siempre y que existe en todas partes donde hay una organización civil seria.

Sr. Cooke. — Adaptado a las constituciones.

Sr. Solá. — Ha existido entre nosotros mucho antes de que se sancionara nuestra Constitución. El señor diputado ha de recordar que la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires, ejercitando las atribuciones ordinarias y aun las extraordinarias que ella se confirió, dictó la famosa ley del 7 de julio de 1823, en que reglamentó la cuestión de los fueros de causa o fueros reales, estableciendo de una manera explícita el fuero militar y

atribuyendo el juzgamiento de los delitos de carácter militar a los tribunales militares; y ha de recordar también que la Suprema Corte, organizada la Nación, en casos producidos con motivo de hechos ocurridos dentro del ejército llegó a aplicar esa ley provincial dándole carácter nacional, antes de la existencia del Código de Justicia Militar.

Sr. Ravignani. — Por vacío de la legislación.

Sr. Solá. — Por lo que fuese. Lo cierto es que el fuero militar, que indudablemente es de excepción, no es un fuero que deba llamar la atención de la Honorable Cámara ni asombrar a nadie, porque históricamente es conocido y aceptado en todas partes del mundo, inclusive entre nosotros, como digo, desde la época anterior a la organización constitucional.

He citado la ley del 7 de julio de 1823 que motivó el decreto ampliatorio de Rivadavia, decreto luminoso que un autor de derecho constitucional argentino ha considerado como la base de toda la legislación orgánica de la materia dictada en el país cincuenta años después.

El señor diputado Fassi, con su habitual erudición y facilidad, les ha demostrado que la Corte Suprema tiene a este respecto una jurisprudencia invariable. Pero aquí me asalta la otra observación que he oído al señor diputado Pizarro cuando argumentaba que el fuero militar y los tribunales militares son simples delegaciones de funciones constitucionales del presidente de la República. No alcanzo a comprender cuál es el fundamento de esa opinión. Y para que no quede flotando en el ambiente de la Cámara una afirmación tan extraordinaria, me permitiré demostrar que no es ése el fundamento de la organización de la justicia militar.

Sr. Pizarro. — Es la opinión de Bustillo.

Si me permite el señor diputado, le observaré que he dicho eso dentro de la más pura ortodoxia militar.

Sr. Solá. — Lo que yo digo está dentro de la más pura ortodoxia constitucional.

Sr. Pizarro. — A raíz de eso, voy a preguntar al señor diputado cómo se constituyen los tribunales militares. Habrá de convenir conmigo que son tribunales constituídos directamente por designación del Poder Ejecutivo, que los nombra y los remueve, y sus resoluciones no causan instancia. El ex auditor general de Guerra y Marina, doctor Risso Domínguez, tiene un folleto sobre el particular en que sostiene con amplitud una opinión que yo no comparto.

Sr. Solá. — Me alegro que no la comparta porque me da la satisfacción de encontrarme en la buena compañía del señor diputado.

Sr. Pizarro. — Muchas veces nos vamos a encontrar. Yo pediría que reformáramos la ley.

Sr. Solá. — La ley no da margen a esas cosas. ¿Cómo es posible sostener que la organización de los tribunales militares, la amplísima jurisdicción que se les acuerda hasta para la aplicación del Código Penal ordinario a ciertos casos, puedan ser consideradas delegaciones del presidente de la República, que no tiene función judicial?

Sr. Pizarro. — Sumamente sencillo. ¿Quién nombra y quién remueve los jueces militares?

Sr. Solá. — ¿Quién nombra los jueces federales, quién nombra los jueces de la Capital?

Sr. Pizarro. — Se requiere el acuerdo legislativo para esos jueces.

Sr. Solá. — La observación del señor diputado no tiene fundamento de ninguna clase, porque se refiere a la forma de constitución del tribunal.

Sr. Pizarro. — Y a la sentencia, señor diputado.

Sr. Solá. — Las sentencias causan instancia.

Sr. Pizarro. — No causan instancia.

Sr. Solá. — Causan instancia. Lo que el señor diputado dice, es que las sentencias de los tribunales o consejos de guerra deben ser sometidas al presidente de la República, erigido, por el Código de Justicia Militar, en una autoridad que tiene las facultades necesarias para ello; pero una vez producido el último trámite, las sentencias causan instancia y se ejecutan.

Sr. Anastasi. — ¿Me permite el señor diputado por Buenos Aires?

Sr. Solá. — Sí, señor.

Sr. Anastasi. — El señor diputado ha citado la jurisprudencia de la Corte y precisamente la Corte es la que ha dicho que los tribunales militares no ejercen parte alguna del Poder Judicial, sino simplemente una función del poder militar del Poder Ejecutivo. Bien sabe el señor diputado Solá que la Corte aceptó el criterio del Poder Ejecutivo nacional que encomendó sentencias de los tribunales militares. Bien sabe, además, que una sentencia de los tribunales militares no puede ejecutoriarse sin el cumplimiento del presidente de la República.

Sr. Solá. — Es natural, porque es el resultado del fuero militar, del carácter excepcional del fuero militar y de la calidad del jefe supremo del ejército y de la armada que la Constitución da al presidente de la República.

Pero no me negará el señor diputado que hay sentencias que llega un momento en que son ejecutoriadas y se cumplen y que en virtud de esas sentencias los condenados van a la cárcel y hasta son fusilados. ¡Todavía me va a decir que no causan ejecutoria cuando se llega a la aplicación de esas penas, cuando se llega a fusilar!

Sr. Anastasi. — Si el presidente no la aprueba, no hay sentencia firme. Si fuera una función judicial, no se comprendería que estuviera sujeta a esa aprobación.

Sr. Solá. — El señor diputado está haciendo juego de palabras.

Sr. Anastasi. — No, señor.

Sr. Solá. — La palabra «jurisdicción» entre nosotros tiene un significado muy claro. Significa facultad de decir en derecho, facultad de interpretar la ley para aplicarla con imperio. Y eso es lo que hacen los tribunales militares. Eso es lo que se hace en la jurisdicción militar, una vez cumplidos todos los trámites necesarios para que la sentencia sea definitiva y se cumpla. La forma de organización es distinta a la de los tribunales ordinarios, pero no se puede venir a sostener que no hay justicia militar cuando se está aplicando nada menos que el Código Penal y las leyes militares que crean también delitos especiales con penas perfectamente establecidas, y cuando la Corte nos ha dicho que el Código de Justicia Militar es perfectamente constitucional. Cuando en el artículo 1º del código está establecido que la jurisdicción militar en la República se ejerce únicamente por los tribunales, autoridades y funcionarios que en este código se establecen, no sé cómo se puede sostener con fundamento que la jurisdicción de la justicia militar es una mera delegación de atribuciones constitucionales del presidente de la República.

No se puede aplicar a la gendarmería el Código de Justicia Militar, porque éste contempla un fuero de excepción que no puede aplicarse a un cuerpo que no forma parte del ejército. El señor ministro ha explicado de una manera clara y brillante los artículos 7º, 8º y 16, en lo que se refiere al estado militar, por los delitos o faltas que se cometan. Nosotros estamos en función legislativa y estamos creando el instrumento legal para hacer posible la aplicación del Código de Justicia Militar a este cuerpo de gendarmería que se crea. Se podrá discutir la conveniencia de adoptar este criterio, pero no puede sostenerse válidamente que el Congreso no tiene facultades para ello. Algunos señores diputados han señalado difi-

cultades prácticas que pueden presentarse en la aplicación del Código de Justicia Militar a la gendarmería, pero ello no obsta a las facultades que el Congreso tiene para establecer la jurisdicción militar y la legislación correspondiente.

El artículo 7º fija con exactitud el alcance de la disposición del artículo 8º, yo creo que por la redacción de este artículo la aplicación del Código de Justicia Militar va a estar limitada a lo que se refiere a la disciplina interna, escapando a su jurisdicción todos aquellos casos que no sean de disciplina interna.

El señor diputado Ruggieri, en definitiva, nos ha dicho que este artículo podría suprimirse porque lo que dice ya está dicho en otra parte...

Sr. Ruggieri. — Agregando que ese punto de vista está robustecido en gran parte por las opiniones vertidas en el curso del debate, que no resultan del texto expreso del despacho.

Sr. Solá. — El señor diputado quiere suprimir el artículo 8º por razones de estética legal, para que no haya un artículo que diga algo que ya dice otra ley.

Sr. Ruggieri. — Y para evitar interpretaciones como las que se han oído en el recinto.

Sr. Solá. — No se puede dar al artículo otra interpretación que la que surge de su propio texto, que es perfectamente claro. En la primera parte, se limita a establecer que las faltas que pudieran cometerse en contra de la gendarmería, no quedan sometidas a la jurisdicción militar. La última parte no es para alarmar a nadie, porque se limita a decir: excepto en los casos en que corresponda la aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar. Los particulares, que por la primera parte del artículo quedan exceptuados, quedarán, sin embargo, sometidos al Código de Justicia Militar. ¿Y dónde está el peligro?

Sr. Ruggieri. — ¿Qué necesidad hay en mantener este artículo?

Sr. Solá. — El artículo 8º es el complemento del 7º, en cuanto desenvuelve la idea relativa a los tribunales militares. El artículo 7º contempla los actos del personal de la gendarmería relacionados con la vida interna del cuerpo. En cambio, el 8º establece que los actos que los particulares pudieran cometer contra el cuerpo no están sometidos a la jurisdicción militar. Aunque está de más, es bueno decirlo, porque será una garantía más que tendrán los particulares, que en ningún caso podrán estar sometidos a la jurisdicción militar en cuanto a los actos que pudieran cometer con relación a los

componentes del cuerpo. Y la última parte se refiere al Código de Justicia Militar, para decir una cosa que es perfectamente sabida: el Código de Justicia Militar se seguirá aplicando en los casos previstos.

Sr. Ruggieri. — El señor diputado reconocerá que mi observación ha tenido por lo menos, la virtud de provocar las aclaraciones del señor diputado.

Sr. Solá. — He querido disipar algunas dudas que pudieran quedar flotando en el ambiente de la Cámara.

Para terminar, le diré al señor diputado que el carácter de la jurisdicción de los tribunales militares está perfectamente fundado en opiniones de orden doctrinario, legal y constitucional. En el caso de Espina, decía el procurador general: «No se dirá, excelentísimo señor, que la excepción de este artículo importa el restablecimiento de los juicios por comisiones especiales» —se refiere al artículo de la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales militares— «porque la jurisdicción militar ejercida por los consejos de guerra es de institución universal, porque su ejercicio es constante, constitucional, aunque este consejo, como podría serlo el jurado, sea formado por nombramiento en cada caso, porque finalmente el Congreso tiene, según el inciso 17 del artículo 67 de la Constitución nacional, facultad para fijar las atribuciones de los tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia y, según el inciso 23, la de formar ordenanzas y reglamentos para el gobierno de los ejércitos de mar y tierra.»

Ya ve que se le da como fundamento a esta jurisdicción de excepción, no la facultad delegada del presidente de la República, sino una disposición constitucional para organizar los tribunales inferiores a la Suprema Corte de la Nación.

Desde el punto de vista doctrinario, me referiré simplemente a lo que dice Magnasco en su libro conocido: «La jurisdicción militar es indispensable en cualquier sociedad regularmente organizada porque responde a los propósitos superiores de la institución política que constituye el Estado. No surge semejante especialidad de la legislación en razón de simples facilidades de juzgamiento o en razón de divisiones meramente administrativas. Son motivos más altos y más fundamentales los que determinan el establecimiento de leyes y de jueces militares.» Y más adelante dice: «Esta jurisdicción excepcional se funda, pues, en una alta consideración política, en una ra-

zón de Estado: la necesidad de asegurar la misión de obediencia y de sacrificios a que están consagrados los ejércitos y en un principio de distribución de justicia, porque sólo ante los tribunales militares los delitos disciplinarios alcanzan buena y regular justicia».

Creo haber desvanecido las dudas que el señor diputado por la Capital tenía para votar este artículo 8º, demostrando que aun cuando las disposiciones que él contiene pudieran ser repetición de otras leyes, su inserción en ésta completan un cuerpo de doctrina y no pueden traer ninguna consecuencia inaceptable desde el punto de vista constitucional o legal. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Al solo efecto de rectificar la erudita exposición del señor diputado por Buenos Aires en lo que se refiere al alcance de los tribunales militares.

Es necesario refirmar que los tribunales militares no forman parte del Poder Judicial. Por eso le observamos al señor ministro cuando él entendía que el Congreso podía por ley someter a la jurisdicción militar a personas que no están sujetas a esa jurisdicción. Y este concepto lo ha expresado la Corte.

Sr. Solá. — Estamos de acuerdo, señor diputado. Que no forman parte de la justicia federal es evidente. Es una jurisdicción excepcional.

Sr. Anastasi. — No forman parte del Poder Judicial.

Sr. Solá. — ¿Forman parte del Poder Ejecutivo?

Sr. Anastasi. — Sí, señor diputado; era lo que decía el señor diputado Pizarro.

Algo más. El presidente de la República puede aprobar, desaprobar, enmendar sentencias de los tribunales militares. ¿Se concebiría que pudiera hacerlo respecto de los tribunales del Poder Judicial?

Sr. Solá. — Dentro del fuero militar es posible. Y tanto es posible que existe y nadie lo ha objetado y cuando ha sido objetado la Corte ha dicho que está bien.

Sr. Anastasi. — ¿Entonces forman parte o no?

Sr. Solá. — No me interesa...

Sr. Anastasi. — A mí, sí.

Sr. Solá. — ...ubicarlos; no sé dónde el señor diputado quiere ubicarlos. Será una rama judicial administrativa del poder de la Nación. Llámela como quiera. Lo esencial es esto: ¿estamos dictando una ley constitucional o no?

Sr. Anastasi. — Los tribunales militares no

forman parte del Poder Judicial. El presidente de la República puede aprobar, desaprobar, enmendar sentencias de los tribunales militares, y eso no se concebiría con relación a los tribunales del fuero común.

Sr. Solá. — Si no son sentencias, ¿cómo llamaría el señor diputado a las resoluciones que ordenan fusilar a una persona?

Sr. Anastasi. — Son sentencias de los tribunales militares que actúan por delegación del Poder Ejecutivo.

Sr. Solá. — Peor todavía. Yo sostengo que esto no es delegación del Poder Ejecutivo. Me parecería monstruoso otorgarle al Poder Ejecutivo esa función, en el fondo, de carácter judicial, de aplicar el Código Penal a delitos de carácter común y a personas que por su carácter, no teniendo estado militar, están de ordinario fuera del alcance militar.

Sr. Anastasi. — Por eso cuidamos esta ley.

Sr. Solá. — Me parece peligrosa la interpretación del señor diputado. Consideremos a esta ley en la forma que nosotros la hemos contemplado. Son tribunales que están sometidos a una organización especial, con una jurisdicción perfectamente delimitada y con una alta finalidad, como lo he demostrado.

Sr. Anastasi. — Son tribunales meramente ejecutivos.

Para terminar citaré un párrafo de un fallo de la Corte. En el caso Hernández declaró que la intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones de la justicia militar a los fines de su aprobación, reprobación o reforma, no es incompatible con la cláusula del artículo 95 de la Constitución, porque dicha aprobación se refiere a funciones y causas comprendidas en la esfera de acción del Poder Judicial, del que no forman parte los tribunales militares.

Por eso hemos censurado esta ley.

Sr. Fassi. — ¿En qué disposición del Código de Justicia Militar ubica la atribución que da al presidente de la República?

Sr. Anastasi. — Le recomiendo un estudio del doctor Risso Domínguez hecho sobre nuestra organización militar, en que se llega a esa conclusión.

Sr. Fassi. — ¿Pero dónde dice que puede dejar sin efecto, reformar, etcétera?

Sr. Anastasi. — Sería muy largo de explicar, pero puede estar seguro que eso es lo exacto con relación a la jurisdicción militar y estoy seguro que el señor ministro piensa lo mismo. Dentro de la jurisdicción militar la función suprema judicial —así la denominó el señor

diputado— corresponde al presidente de la República.

Sr. Presidente (Kaiser) — Se va a votar el artículo 8º.

—Resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban sin observación, los artículos 9º a 14 inclusive.

Sr. Schoo Lastra. — Pediría que se suprima la lectura de los artículos, enunciándose simplemente y que los que no se observen se den por aprobados.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser) — Habiendo asentimiento, así se hará.

Sr. Pizarro. — Antes de seguir adelante, quiero dejar constancia de que habiéndose creado un cuerpo que es unidad del ejército, sometido al régimen y al Código de Justicia Militar y dirigido por el Ministerio de Guerra, ésta es una facultad privativa del Ejecutivo, sobre la cual nosotros no podemos entrar a discutir.

—Sin observación, se dan por aprobados los artículos 15 a 27 inclusive.

—En discusión el artículo 28.

Sr. Pizarro. — Sería interesante conocer la opinión del Poder Ejecutivo sobre la constitución de los tribunales militares en los distintos lugares donde se han instalado los comandos divisionales.

Sr. Lazo. — Eso no puede establecerse ahora; se hará en el decreto reglamentario.

Sr. Presidente (Kaiser). — Estamos tratando el artículo 28, señor diputado.

Sr. Pizarro. — Perfectamente, entonces reservo mi observación para cuando se trate el artículo siguiente.

Sr. Presidente (Kaiser.) — No habiendo observación, se da por aprobado el artículo 28.

En discusión el artículo 29.

Sr. Pizarro. — A ese artículo me refiero.

La constitución de esos tribunales militares y la jurisdicción ¿quién se las va a acordar?

Sr. Fassi. — El artículo 7º determina la ley que se va a aplicar y el 29 los jueces que la van a aplicar.

Sr. Ministro de Guerra. — Esa será materia de la reglamentación.

Sr. Pizarro. — Entonces, coincido con el señor ministro.

Sr. Anastasi. — Es una contestación al señor diputado Solá, porque queda demostrado que se pueden crear tribunales por reglamentación.

Sr. Pizarro. — Es un nuevo triunfo del señor ministro.

Sr. Presidente (Kaiser.) — ¿El señor diputado por Córdoba formula alguna modificación?

Sr. Saccone. — Era una aclaración que quería hacer el señor diputado.

—A continuación se dan por aprobados los artículos 29 a 45 inclusive.

—En discusión el artículo 46.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Entiendo, señor presidente, que este artículo no se puede votar en silencio. Contemplando la situación de la Cámara no he formulado observaciones a algunos otros artículos que acaban de aprobarse; pero en este importante aspecto de la ley, deseo dejar documentada mi disidencia.

Me parece que en la discusión en general, probé en forma concluyente que la ley en este capítulo simpático de la función colonizadora, nacía muerta. Es que estas disposiciones han sido redactadas con un desconocimiento completo del índice de producción de los terrenos que va a manejar. ¿Cómo se va a hacer en los campos de la Patagonia, que tienen a penas una capacidad de 800 a 1.200 cabezas por legua, colonias de 50 a 200 hectáreas como determina la ley de *home stead*, a la cual tendrá que sujetarse esta ley?

Toda la Patagonia, desde el paralelo 29 al 55 es una estepa inmensa amarilla y encorvada como el lomo de un gigantesco camello y condenada por su clima y por su suelo, al cultivo extensivo y unilateral de la oveja. De los 40.000.000 de ovejas que posee el país, 20.000.000 están en la Patagonia, y son las que dan la mejor lana del mundo y por la naturaleza de sus pastos también la mejor carne del mundo. Y esta riqueza de 20.000.000 de ovejas, si esta ley hubiera sido redactada por hombres conocedores de los campos territorianos, podría duplicarse. Hay centenares de leguas perfectamente aptas para la explotación de ovejas, y que no se hace en la actualidad por falta de agua. Y no se crea que hay que hacer allí costosas obras de irrigación, porque basta con pequeñas perforaciones que los pobladores no

pueden efectuar por sí. Asímbrense los señores diputados estancieros de la provincia de Buenos Aires: en los territorios del Sur un jagüel cuesta dos, tres, cinco, diez a quince mil pesos, 200 pesos el metro de perforación en roca viva. Con solamente proveerse de una media docena de equipos perforadores, se podría habilitar, en un par de años, centenares de leguas aptas para esta explotación.

Me permito sugerir al señor ministro de Guerra —pues tengo la sensibilidad suficiente para darme cuenta de la intransigencia rayana en la exaltación en que se ha colocado la Comisión de Guerra, que seguramente rechazará mi modificación— que ese regimiento de zapadores que está en Bariloche lo haga correr, en sus ejercicios, más al Sur y al centro de la meseta patagónica, y le ordene la ejecución de esa obra con sus medios propios, con lo que se hará un gran bien al país. Si el regimiento de zapadores realiza esa obra, que cuesta tan poco, con toda razón podremos decir algún día que la VI División del Ejército ha realizado la conquista de la meseta patagónica para la ganadería argentina.

Comprendo que aunque se modifique este artículo 46, no se va a resolver el problema de la colonización de los territorios, porque habría que ir a una modificación de fondo de la ley de tierras, convirtiéndola en una moderna ley de colonización, pero con una simple modificación a esta ley de gendarmería, ampliando estos lotes de cinco y diez mil hectáreas, a lotes de ochenta o cien leguas, esta ley podría realizar su gran función colonizadora.

Pues yo imagino que el espíritu de la ley es ir a poblar campos que en la actualidad están desiertos. Se sobreentiende que no puede estar en el espíritu de la ley, el ir a desalojar a los actuales pobladores, de los mejores campos patagónicos, a hombres que han adquirido derechos, porque se trata de pobladores que han ido en épocas lejanas y realizaron un gran esfuerzo en pro de la ganadería de esos campos, entonces, como digo, desiertos.

No puedo olvidar en este momento que soy miembro de la Comisión de Territorios Nacionales y de que tenemos la obligación de aprovechar todas las oportunidades que se presentan para poner en conocimiento de la Cámara ciertos aspectos serios y graves de los territorios nacionales. Por esa circunstancia y a pesar de que tengo el sentido de la discreción, dada la hora avanzada en que estamos sesionando, tendré que molestar a la Honorable Cámara durante unos minutos para hablar de dos cues-

tiones de extraordinaria urgencia para los territorios y, sobre todo, para los del Sur.

En cuanto a la primera, ya que esta ley tiene su aspecto colonizador, podría decir que mientras nos preocupamos de ir a poblar campos desiertos nos estamos olvidando de que la parte más poblada de la Patagonia, el valle de Chubut se muere, por la invasión del salitre negro. Este salitre está inundando el valle de Chubut, porque el poder público no habilita los fondos necesarios para realizar los trabajos de drenaje del río Chubut que habrían de salvar ese riquísimo lugar de esta verdadera desgracia que lo está despoblando. Se trataría de una simple obra de drenaje de las aguas de ese magnífico río Chubut, que es como una gran vena de sangre caliente, realizando permanentemente el milagro más grande de Dios: el de la vida, en las plantas, los hombres y las cosas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

El costo de las obras ha sido calculado en cinco millones de pesos, y salvaría el valle de Chubut, ampliándolo todavía en veinte o treinta mil hectáreas más. El valle de Chubut es la huerta que provee a toda la Patagonia, de alimentos frescos. No es el momento de estudiar, el monto de su producción en trigo, alfalfa, cebollas, garbanzos y de sus extraordinarias posibilidades en la producción de manzanas.

Otro aspecto importante, que quiero sintetizar en pocas palabras y que afecta a los territorios del Sur, es la terminación del plan ferroviario, que trazó la vieja ley, llamada de los ferrocarriles faraónicos, sancionada en la época lejana en que Ezequiel Ramos Mejía desempeñaba la cartera de Obras Públicas. La terminación del plan mediante el cumplimiento de esta ley inconclusa, llevaría los ferrocarriles patagónicos, que en el momento están detenidos en pleno desierto, hasta la precordillera, y establecería el cauce natural de salida de toda esa inmensa riqueza ganadera de la precordillera que actualmente necesita recorrer enormes distancias para llegar a los puertos de embarque.

Tengo el informe de la dirección de construcciones de los Ferrocarriles del Estado, que me permite afirmar que la prolongación del ferrocarril de Madryn a Las Plumas, llevándolo hasta Paso de Indios, en una extensión de 195 kilómetros, desiertos en la actualidad, costaría solamente nueve millones de pesos, abriendo una excelente y segura vía de comunicación a las ricas regiones del lago General Paz, colonia San Martín, Nueva Lubeca y Tecka, dando así salida a una inmensa riqueza por Puerto Madryn. La prolongación del ferrocarril de Deseado a colo-

nia Las Heras, costaría veinte millones de pesos, poniendo en comunicación Puerto Deseado con el lago Buenos Aires, con el Pueyrredón, con el Posadas y con el Gío, vinculando las partes más ricas de la precordillera, con aquel puerto de mar.

Sintetizando, creo señor presidente, haber demostrado que en la forma en que está redactado este artículo 46 y los subsiguientes, es imposible el cumplimiento del aspecto colonizador de la ley, que podría a pesar de todas sus fallas, consumarse, si la comisión aceptase la ampliación de los lotes, en el número de hectáreas que indiqué.

Por estas circunstancias, dejo salvado mi voto, estableciendo que esta ley establece disposiciones que no resolverán la situación que este Parlamento, desde hace mucho tiempo debiera haber resuelto.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿Propone alguna modificación el señor diputado?

Sr. Solana. — No, señor presidente; desisto, porque veo la posición irreducible en que se ha colocado la comisión.

Sr. Quintana. — Pido la palabra.

En atención a los deseos expresados por la Cámara, de que en la sesión de mañana puedan considerarse los asuntos que ella se ha señalado, formulo moción de que pasemos a cuarto intermedio.

Sr. Lazo. — Yo le rogaría al señor diputado retirase su moción, porque en pocos minutos más vamos a terminar la consideración total del despacho.

Sr. Quintana. — Si el señor diputado lo cree así, no tengo inconveniente en retirar la moción.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 46 del despacho.

— Resulta afirmativa.

— Sin observación, se dan por aprobados los artículos 47 a 57 inclusive.

— En discusión el artículo 58.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Una rápida ausencia del recinto me ha depaado una sorpresa. Cuando me retiré, se acababa de votar el artículo 8º y cuando regresé, a los pocos minutos, se estaba discutiendo el artículo 46, lo que me impidió hacer una observación sobre el artículo 19, que no haré ahora, para no darle carácter retroactivo a mis palabras.

El artículo 58 me depara, en cambio, la oportunidad de pedir al miembro informante de la comisión una aclaración respecto al alcance de la disposición contenida en él.

El artículo 58 dice: «El Poder Ejecutivo queda facultado para designar como jefes civiles de las oficinas de Correos y Telégrafos, de Registro Civil e inspectores de las escuelas de las colonias que se crean por la presente ley, a los oficiales y clases de gendarmería que tengan el comando de la unidad o destacamento que la guarnezca, sin que estas funciones den derecho a sobresueldos o remuneración especial.

Yo admito que se pueda nombrar jefe de Correos y jefe de Registro Civil en los territorios nacionales, pero no que se designen en la misma forma inspectores de escuelas.

Ya habíamos advertido que en el artículo 19 se creaban escuelas, es decir, se autorizaba al ministerio la creación de escuelas, sacándolas de su jurisdicción natural determinada por la ley número 1.420, que es el Consejo Nacional de Educación. Pero admito que se creen escuelas con prescindencia del Consejo Nacional de Educación, por más que yo no sé si la dirección y los planes técnicos van a ser elaborados por los jefes de gendarmería.

En cambio, me parece de elemental prudencia que los inspectores de las escuelas en esas funciones técnicas sean los funcionarios técnicos dependientes del Consejo Nacional de Educación.

No se podrá objetar que el Consejo Nacional de Educación no llega hasta esos establecimientos, porque en la forma en que el consejo distribuye sus escuelas por todos los territorios, no hay zona del país que no pueda ser inspeccionada por los visitadores de territorios.

Yo creo, entonces, que se podrían aceptar estos inspectores de las escuelas que se crean, pero con carácter exclusivamente administrativo, como hacen los encargados escolares de las escuelas nacionales en las provincias, que cuidan de que el edificio esté en buenas condiciones, así como los materiales escolares de enseñanza, la higiene, etcétera, y agregar que la inspección técnica se solicitará del Consejo Nacional de Educación.

Yo me refiero, pues, a que no es conveniente que las funciones de inspector de escuelas se confíen a oficiales o clases del cuerpo de gendarmería, porque son funciones de carácter técnico que solamente pueden ser desempeñadas con eficiencia por técnicos. De modo que esa función de inspección encomendada a los ofi-

ciales o clases debe ser puramente de carácter administrativo.

Sr. Arbeleche. — Pido la palabra.

El artículo 19 establece que el Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para adscribir a cada escuadrón, compañía o grupo de gendarmería el número de maestros que fuesen necesarios para el funcionamiento de cursos de enseñanza primaria a los menores de edad, en lugares donde no funcionen escuelas o donde ellas sean insuficientes, pero es evidente, señor presidente, que eso lo hará el Poder Ejecutivo de acuerdo a la ley de educación común, número 1420, cuyo artículo 57, inciso 2º, establece, que la vigilancia de la instrucción primaria en los territorios, el nombramiento o renovación de su personal, etcétera, estarán a cargo del Consejo Nacional de Educación.

Por otra parte, como lo habrán podido notar los señores diputados, cuando se da la nómina del personal, se habla de asesores, médicos, aprovisionadores, farmacéuticos, veterinarios, no se menciona a los maestros, con lo cual se da a entender que será precisamente el Consejo Nacional de Educación el que tiene que designarlos.

En cuanto a las funciones de esos inspectores, serán precisamente . . .

Sr. Solana. — Pero eso no lo dice el artículo.

Sr. Arbeleche. — . . . las que ha mencionado el señor diputado por la Capital.

Las funciones de estos inspectores de enseñanza no serán las que tienen a su cargo los que designa el Consejo Nacional de Educación.

Creo que con esto queda bien aclarada la observación que se ha formulado.

Sr. Guillot. — Decididamente no nos entendemos con mi colega el señor diputado Arbeleche.

Yo he dicho que la creación de escuelas y la designación de maestros puede admitirse, pero lo que no puedo admitir, es que la dirección técnica de esas escuelas pueda ser confiada a jefes u oficiales de gendarmería, por ilustrados

que ellos sean. Esto es lo que yo he querido decir. Pero en ninguna parte de la ley se dice que estas escuelas serán creadas de acuerdo con el Consejo Nacional de Educación.

A mí me bastaría con que el miembro informante de la comisión manifestara que estas escuelas y la inspección —excluyendo la vigilancia administrativa del personal de gendarmería— se hará de acuerdo con funcionarios del Consejo Nacional de Educación.

Sr. Guglielmelli. — Es facultativo, lo que quiere decir que el Poder Ejecutivo puede o no nombrar. Tengo, por otra parte, la seguridad de que las observaciones muy atinadas del señor diputado Guillot, el Poder Ejecutivo las contemplará.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 58.

—Se vota y aprueba el artículo, así como el resto del despacho.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda definitivamente sancionado y se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Lazo. — Hago moción de que se levante la sesión.

—Se retiran algunos señores diputados.

Sr. Presidente (Kaiser). — Invito a los señores diputados a ocupar sus bancas, porque en el caso de que no hubiese número para votar, se debe pasar lista.

—Ocupan sus bancas los señores diputados, y dice el:

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar la moción de levantar la sesión.

—Resulta afirmativa.

—Es la hora 22 y 15.